



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
7° Reunión - 5° Sesión ordinaria – 1° de junio de 2011

Presidencia del señor presidente provisional del H. Senado,
senador **José Juan Bautista Pampuro**,
del señor vicepresidente del H. Senado, senador **Juan Carlos Marino**
y del señor vicepresidente 1° del H. Senado, senador **Juan Carlos Romero**

Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Antonio Benigno Rins**
Prosecretarios: señor D. **Luis Gustavo Borsani**, señor D. **Mario Daniele** y
señor D. **Gustavo Carlos Vélez**

PRESENTES:

ARTAZA, Eugenio J.
BANICEVICH, Jorge E.
BASUALDO, Roberto G.
BERMEJO, Rolando A.
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CABANCHIK, Samuel M.
CALCAGNO Y MAILLMANN, Eric
CANO, José M.
CASTILLO, Oscar A.
CIMADEVILLA, Mario J.
COLAZO, Mario J.
CORPACCI, Lucía B.
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena M.
DI PERNA, Graciela A.
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia M.
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FUENTES, Marcelo J.
GIOJA, César A.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro G.
GUINLE, Marcelo A.
HIGONET, María de los Angeles
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo R.
JUEZ, Luis A.
LATORRE, Roxana I.
LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio F.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MARTÍNEZ, José C.

MAYANS, José M.
MESTRE, Ramón J.
MONLLAU, Blanca M.
MONTERO, Laura G.
MORALES, Gerardo R.
MORANDINI, Norma E.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
NIKISCH, Roy A.
OSUNA, Blanca I.
PAMPURO, José J.
PARRILLI, Nanci M.
PÉREZ ALSINA, Juan A.
PÉRSICO, Daniel R.
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos A.
RÍOFRÍO, Marina R.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROJKES de ALPEROVICH, Beatriz L.
ROLDAN, José M.
ROMERO, Juan C.
SANZ, Ernesto R.
TORRES, Eduardo E.
VERANI, Pablo
VERNA, Carlos A.
VIANA, Luis A.
VIGO, Élide M.

AUSENTES, CON AVISO:

BIANCALANI, Fabio D.
FILMUS, Daniel F.
MAZA, Ada M.
MEABE, Josefina A.
MENEM, Carlos S.
RACHED, Emilio A.
VERA, Arturo

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional
2. Homenaje al aniversario de la provincia de Tierra del Fuego
3. Asuntos entrados
4. Plan de labor
5. Regulación del precio de los aerocombustibles. Moción de preferencia. (S.-1.191/11)
6. Regimen de promocion minera. Mocion de preferencia. (S.- 402/10)
7. Sitios de memoria del terrorismo de estado. Moción de tratamiento sobre tablas – ley de transparencia sindical . Moción de preferencia. (C.D.- 14/10 – S.- 517/11)
8. Produccion pública de medicamentos – Enfermedades poco frecuentes. Moción de preferencia. (C.D.- 3/11 y C.D.- 128/09)
9. Regimen previsional para trabajadores agrarios – Personal de casas particulares. Moción de preferencia. (S.- 1006/10 y C.D.- 23/11)
10. Modificación del código penal. Moción de preferencia. (S.- 3654/10 y O.D. N° 263/11)
11. Manifestaciones
12. Banco del Sur. Transferencias bancarias. Cheque cancelatorio. Mociones de preferencia. (PE.-383/09, O.D. N° 364/11 y O.D. N° 345/11)
13. Asignación universal por hijo. Equiparación. Moción de preferencia
14. Accidente aéreo en Río Negro – Aniversario del hospital privado de la comunidad. (S. 1131/11 – S 1188/11)
15. Subdistribuidores de gas. Moción de preferencia. (C.D.- 403/10)
16. Consideración en conjunto de los órdenes del día
 - Repudio del ataque al juez doctor Javier Aróstegui. (O.D. N° 207/11)
 - Adhesión al Proyecto Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. (O.D. N° 208/11)
 - Repudio del ataque al Memorial de las Víctimas de la última dictadura militar en Villa Allende, Córdoba. (O.D. N° 209/11)
 - Muestra agropecuaria EXPOAGRO 2011. (O.D. N° 211/11)
 - Pedido de informes sobre el porcentaje del Presupuesto asignado al Programa de Productos Forestales No Madereros en San Juan. (O.D. N° 213/11)
 - Beneplácito por la participación argentina en la Berlín Fruit Logística. (O.D. N° 214/11)
 - XI Feria y Seminarios de Producciones Alternativas. (O.D. N° 215/11)
 - Pedido de informes sobre las compras de gas natural licuado proyectadas para el corriente año. (O.D. N° 217/11)
 - Pedido de informes sobre el estado de avance de un concurso de precios referido a adjudicar proyectos eólicos. (O.D. N° 219/11)
 - Pedido de informes sobre el proyecto de importar gas de Chile. (O.D. N° 220/11)
 - Beneplácito por la presentación de la nueva Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces en Neuquén (O.D. N° 221/11)
 - Pedido de informes sobre la instalación de un reactor CAREM en Formosa. (O.D. N° 222/11)
 - Beneplácito por la reapertura del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu en Río Negro. (O.D. N° 223/11)
 - Beneplácito por la ampliación del Parque Eólico de Arauco, Aimogasta, La Rioja. (O.D. N° 224/11)
 - Pedido de informes sobre el envío de intimaciones de la empresa Camuzzi Gas del Sur a usuarios de Trelew, Chubut. (O.D. N° 225/11)

- Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. (O.D. N° 323/11)
- Solicitud de creación de un premio de la Unasur destinado a personas o instituciones destacadas del ámbito Artístico, Intelectual, Científico y de la Solidaridad. (O.D. N° 324/11)
- Expresión de pesar por la masacre de niños en una escuela de Río de Janeiro, Brasil. (O.D. N° 325/11)
- Satisfacción por el apoyo de Unasur a la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas en la ONU. (O.D. N° 326/11)
- Pedido de informes sobre el cumplimiento del acuerdo con el Uruguay sobre la constitución de un Comité Científico para el Monitoreo del Río Uruguay. (O.D. N° 327/11)
- Promoción de la Secretaría de Turismo de la Nación y el Consejo Federal de Turismo en la estación parisina “Argentine”. (O.D. N° 328/11)
- Programa Turismo, Patrimonio y Escuela del Ministerio de Turismo de la Nación. (O.D. N° 329/11)
- Declaración de interés nacional y turístico el aniversario de Aldea Beleiro, Chubut. (O.D. N° 330/11)
- Declaración de interés nacional y turístico el aniversario de Epuyen, Chubut. (O.D. N° 331/11)
- Inclusión del calendario turístico, el festival Nacional de la Salamanca que se realiza en Santiago del Estero. (O.D. N° 332/11)
- Declaración de interés el 20 de noviembre, fecha de la creación de la reserva ecológica Bosque Petrificado Sarmiento “José Ormaechea”, Chubut. (O.D. N° 333/11)
- Declaración de interés el 11 de diciembre, como” Día de la Localidad de Paso de Indios” Chubut. (O.D. N° 334/11)
- Fiesta Regional del Ganadero en Chubut. (O.D. N° 335/11)
- Beneplácito por el Primer Encuentro Patagonia- Cuyo de Turismo Rural Comunitario en Neuquén. (O.D. N° 336/11)
- Creación del circuito turístico religioso “El Camino de la Virgen” en Catamarca. (O.D. N° 337/11)
- Declaración de interés al 16 de febrero como día del aniversario de la fundación de la localidad de Los Altares, Chubut. (O.D. N° 338/11)
- Solicitud de medidas para resolver el problema habitacional de las familias afectadas por el desborde del río San Antonio, en Salta. (O.D. N° 350/11)
17. Modificación del código penal respecto del delito de lavado de activos. (C.D.- 40/11; S.- 209/11)
18. Modificación de la ley 24.522 (concursos y quiebras) (C.D.- 37/11)
19. Modificación de la ley 24.522 de concursos y quiebras. Proyecto de ley correctivo. (S.- 1.228/11)
20. Resarcimiento a ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos Zapla. (O. D. N° 307/11)
21. Comunicación electrónica judicial. (O.D. N° 261)
22. Protección integral para las personas trasplantadas. (S.- 3.441/10)
23. Asuntos reservados en mesa
24. Acuñación de moneda con la imagen del colegio del Uruguay Justo José de Urquiza. (O.D. N° 204/11)
- Día del niño heroico “Pedro Ríos”, conocido como tambor de Tacuarí. (O.D. N° 176/11)

- *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 27 del miércoles 1° de junio de 2011:*

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor senador Rolando Adolfo Bermejo a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- *Puestos de pie los presentes, el señor senador Bermejo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

2

**HOMENAJE AL ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO**

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al 20° aniversario de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable Senado de la Nación Argentina resuelve expresar su homenaje a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con motivo de haberse cumplido el 20° aniversario de su provincialización dispuesta por la ley 23.775, habiendo dictado su propia Constitución en 1991, siendo una provincia de singular importancia y significación por sus riquezas y bellezas naturales y el alto desarrollo de sus industrias.”

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.¹

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.¹

4

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz.– Señor presidente: solicito que se reserve en mesa el proyecto de declaración que lleva el número de expediente S.-3728/10, por el que se declara de interés del Senado la publicación interactiva *San Rafael Somos*. Por la fecha en que nos encontramos sería necesario tratarlo hoy.

¹ Ver el Apéndice.

Declaración de interés el 20 de noviembre, fecha de la creación de la reserva ecológica Bosque Petrificado Sarmiento “José Ormaechea”, Chubut. (O.D. N° 333/11)

Declaración de interés el 11 de diciembre, como” Día de la Localidad de Paso de Indios” Chubut. (O.D. N° 334/11)

Fiesta Regional del Ganadero en Chubut. (O.D. N° 335/11)

Beneplácito por el Primer Encuentro Patagonia- Cuyo de Turismo Rural Comunitario en Neuquén. (O.D. N° 336/11)

Creación del circuito turístico religioso “El Camino de la Virgen” en Catamarca. (O.D. N° 337/11)

Declaración de interés al 16 de febrero como día del aniversario de la fundación de la localidad de Los Altares, Chubut. (O.D. N° 338/11)

Solicitud de medidas para resolver el problema habitacional de las familias afectadas por el desborde del río San Antonio, en Salta. (O.D. N° 350/11)

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.¹

17

C. D.- 40/11; S.- 209/11

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL RESPECTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación, vamos a tratar los proyectos sobre tablas acordados que se enunciarán por Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley enviado en revisión por la Honorable Cámara de Diputados, C.D.- 40/11, por el que se modifica el Código Penal respecto del delito de lavado de activos, y en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero –S. 209/11– que reproduce el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 278 del Código Penal respecto del delito de lavado de activos. Por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en revisión.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente, se llevó adelante la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el 10 de mayo, con una presencia muy importante. Estuvo presente el ministro de Justicia, el presidente de la UIF, el licenciado Miguel Pesce, en su carácter de presidente de la Comisión de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del Banco Central de la República Argentina; el doctor Norberto Peruzzotti, de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino; el señor Fábrega, en representación de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina; el doctor Claudio Césareo, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina; el licenciado Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros; el escribano Carlos Marcelo D’Alessio, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el doctor Jorge Rodríguez Córdoba, representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor

¹ Ver el Apéndice.

Guillermo Fernández, secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; el señor Edgar Mihailovitch, en representación de la Asociación de Fábricas de Automotores; y el doctor Marteau, especialista en temas referidos al delito del lavado de activos.

De acuerdo con lo debatido en el ámbito de la comisión, se llegó a la conclusión de que, atento a la exhortación realizada por el ministro de Justicia en el sentido de que el país necesita contar con una ley aprobada antes de la próxima revisión del GAFI, que es el 20 de junio, en esta sesión avancemos dándole sanción definitiva a la sanción de la Cámara de Diputados pero avanzando en la misma sesión en una ley correctiva cuyo dictamen se firmó también en la reunión de ayer. Por lo tanto, solicito que en un solo debate informemos las dos cuestiones: la sanción de la Cámara de Diputados y la ley correctiva, y que se vote una a continuación de la otra.

Me molesta un poco que estemos siempre legislando con el apuro de términos que se vencen. La verdad es que el GAFI empezó a pedir estos ajustes a la legislación argentina desde 2004. ¿Y qué estuvimos haciendo desde 2004 hasta ahora para tener que aprobar contrarreloj estas modificaciones a la ley?

Si uno entra a Internet y busca las noticias, vemos que cada vez que iba el ex ministro de Seguridad, actual jefe de Gabinete de Ministros, a las reuniones del GAFI, aparecían partes de prensa que decían que el GAFI no recomendaba ninguna sanción contra la Argentina. Todo estaba maravilloso: se iba a las reuniones y se volvía; no había sanciones contra la Argentina. De golpe, nos dicen que si antes del 20 de junio no tenemos la ley, la Argentina puede ser sancionada. Este proyecto de ley no debe convertirse en norma bajo presión de amenaza de una sanción internacional sino que necesita ser un compromiso de la clase política argentina en la lucha contra la criminalidad organizada.

Quiero destacar también dónde está la Argentina y dónde están los consensos de la clase política argentina. Sobre el particular, quiero destacar una continuidad de decisión de la política argentina. En 1997, la Argentina decide ser miembro adherente de la OCDE. En 1999, ingresamos al G-20. En 2000, adherimos al GAFI, aprobamos la ley contra el lavado de activos y creamos la Unidad de Información Financiera. Posteriormente, avanzamos en la tipificación del delito de asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Es decir, bajo los gobiernos de Menem, de la Alianza y de Kirchner, la Argentina siempre ha tomado la decisión de ser parte del mundo desarrollado; de países emergentes que se pueden sentar a la misma mesa con los países desarrollados, como sucede en el G-20, y empezar a ser escuchados en cuanto a las modificaciones que creemos deben llevarse adelante a nivel global. Este tiene que ser el sentido de la sanción de hoy: la Argentina, avanzando en estándares internacionales y ratificando su compromiso en la lucha contra el lavado del dinero y contra la financiación del terrorismo.

Dicho esto, quiero ratificar que este proyecto de ley no debe ser solamente una cosmética legislativa para cumplir con el GAFI y para que la Argentina no sea sancionada. Quiero aquí hacer referencia a qué importaría una sanción del Grupo de Acción Financiera. Nadie le exigió a la Argentina ser parte del GAFI, es una decisión de la política argentina ser parte de estas instituciones.

El GAFI hace una autoevaluación; es decir, todos los miembros hacen la evaluación. Si nosotros no tenemos un fuerte compromiso, no servirá de nada. ¿Qué dijo la revisión del mes de octubre del GAFI con relación a la Argentina? Que la Argentina cumple parcialmente o incumple 46 de las 49 recomendaciones del GAFI; y el anterior ministro de Justicia nos venía diciendo que estaba todo perfecto, que no había sanción alguna de amenaza.

¿Cuál es la posibilidad de sanción? La posibilidad de sanción es que el GAFI haga

una declaración y diga que la Argentina no es un país cooperante en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cuál sería la consecuencia? Que todos los países miembros del GAFI –todo el mundo desarrollado y el grupo de países emergentes– empezarían a revisar cuidadosamente toda transacción que venga a la Argentina o que salga de aquí. Eso significaría mayores plazos y mayores costos de transacciones financieras. Es decir, el perjudicado no sólo sería el gobierno de la Argentina sino todo el sistema productivo argentino. Además de esta consecuencia, también tendríamos el reproche moral de la Argentina, que no tiene palabra, que firma convenios, asume compromisos y, después, no los cumple.

De la sanción de la Cámara de Diputados, podemos decir que, en lo esencial, se ha hecho un gran trabajo de consenso. De hecho, advertimos que había que ajustar algunas cuestiones porque dejaban la norma muy abierta. Entonces, íbamos a llegar a una lógica de cambalache donde puede ser lo mismo investigar a quien compró un yate de lujo que hacerlo con quien adquirió un televisor. Por lo tanto, hay que dar algún sentido de magnitud a lo que es esta herramienta para la lucha contra el lavado de dinero.

La otra cuestión importante es que necesitamos que los funcionarios de la UIF sean capaces y probos; que no sean funcionarios que, por cuestión ideológica o de amistad, se dediquen a cajonear los expedientes que pueden involucrar a amigos y utilizar información reservada para perseguir a adversarios políticos.

Dicho esto, empiezo a relatar un poco y explicar cuáles son las modificaciones que incluye el proyecto de la Cámara de Diputados.

Desde el artículo 1° hasta el 4°, tenemos las modificaciones al Código Penal. Entre ellas, quiero destacar la primera, que es muy importante. Por primera vez entendemos en el Código Penal que existe un nuevo bien jurídico que hay que proteger en la Argentina, que es el orden económico y social.

Quiero agregar que sólo la venta de droga, por ejemplo, en los Estados Unidos, por el alto consumo, es un negocio de 37 mil millones de dólares por año. Por su parte, en la Unión Europea, es un negocio de 34 mil millones de dólares por año. Si la Argentina no fortalece sus instituciones y sus controles, y si parte importante de ese dinero sucio viene a lavarse a nuestro país, imagínense la penetración que puede llegar a tener en la política y en el manejo de todas las instituciones argentinas. Este es un tema serio y prioritario: proteger el orden económico y social.

La gran modificación con relación al delito de lavado de activos es que lo sacamos del capítulo de encubrimiento. Ya no solamente penalizamos a quien encubre o trata de dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del ilícito que otra persona cometió sino que, también, sancionamos el autolavado, es decir, a quien da apariencia de legalidad al producido de su propio delito. Por eso, lo ubicamos en otro título, que es el nuevo artículo 303.

La otra cuestión importante es que elevamos la escala penal, la escala del monto de este delito. La figura básica del delito de lavado de activos va a ser a partir de los 300.000 pesos y no 50.000 pesos, como es hasta ahora. De hecho, tenemos figuras agravantes. Va a ser agravante cuando la persona se dedique habitualmente a lavar dinero o cuando integre asociaciones dedicadas a este delito; cuando el delito sea cometido por funcionarios públicos o por profesionales que requieran una habilitación especial –por ejemplo, abogados, contadores, etcétera–. Tenemos un delito más leve cuando la cifra está por debajo de los 300 mil pesos o cuando se está recibiendo dinero del delito que cometió otra persona.

En el artículo 5° del proyecto, se incorpora otra novedad esencial, que es la responsabilidad penal, las sanciones penales a las personas jurídicas. Este es un tema que venía siendo solicitado por el GAFI. En este sentido, se había presentado un proyecto hace

tiempo. También está contenido en el proyecto de reforma del Código Penal que duerme en el Ministerio de Justicia. Entonces, aquí, si bien aparece solamente para el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, estamos sancionando seriamente a las personas jurídicas que se benefician con la comisión de este delito. Las sanciones pueden ser multas, suspensión total o parcial de actividades, cancelación de la personería jurídica, pérdida de beneficios estatales y publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Este es un tema muy importante porque lo vimos en nuestro país muchas veces. Una empresa comete un acto de corrupción, por ejemplo, un soborno a un funcionario público. ¿Qué hace la empresa hasta ahora? Desvincula a esa persona que comete el delito, el individuo se somete a las sanciones penales y la empresa se beneficia, quizás, con un jugoso contrato con el Estado, a través de este delito. A partir de ahora, la empresa va a ser fuertemente sancionada: perderá ese contrato; perderá, seguramente, la posibilidad de seguir contratando con el Estado.

En el nuevo artículo 305, se toma otra decisión muy novedosa y que también venía siendo reclamada por el GAFI: es la posibilidad de que los jueces puedan disponer el decomiso de los bienes producto de este ilícito sin necesidad de condena penal. ¿En qué casos? Cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes o el hecho material al que estuvieren vinculados; cuando el imputado no pudiese ser enjuiciado por fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal; o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Esto es muy importante porque en la lucha contra el crimen organizado, si no establecemos esta sanción de decomiso del beneficio de ese delito, en realidad, se lo consolida. Con un sistema penal de tan largos plazos como el de la Argentina, donde los juicios pueden durar doce años, en esa espera de doce años, los bienes desaparecen. Entonces, se establece que los activos decomisados de esta forma serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado.

Por vía del artículo 7° del proyecto, se incorpora un párrafo al artículo 23 del Código Penal: que en los casos de asociación ilícita con fines terroristas o de financiación del terrorismo, también se pueda disponer de este decomiso de bienes sin necesidad de condena penal previa.

A partir del artículo 7°, nos adentramos en el diseño de la Unidad de Información Financiera. La novedad es que se le da a la UIF la autonomía. Hasta ahora, sólo tenía autarquía financiera. Ahora, también le otorgamos autonomía, que es la capacidad de darse sus propias normas dentro, por supuesto, de este marco normativo general de referencia.

Por el artículo 8°, se incorporan algunos otros delitos, que son los que tiene que mirar la Unidad de Información Financiera. Se incorpora el delito de contrabando de estupefacientes, la extorsión, los delitos previstos en la ley impositiva y la trata de personas.

Se establece un sistema mucho más transparente para la designación de los miembros de la Unidad de Información Financiera; se establecen requisitos de capacitación y de experiencia para esos miembros.

El otro tema importante es que se allana el secreto fiscal. En esto, hubo mucha resistencia de parte de la AFIP en otras épocas, cuando estaba Abad al frente del organismo. De acuerdo con la legislación actual, si la UIF necesita acceder a información impositiva de algún contribuyente, debe recurrir a un juez federal para pedir que allane el secreto fiscal; ¿cómo se puede avanzar en investigaciones financieras de esta forma? En cambio, ahora, se remueve dicho obstáculo y la AFIP no puede oponer el secreto fiscal; ni la AFIP, ni los bancos, ni nadie pueden oponer el secreto a la Unidad de Información Financiera.

También se incrementan los miembros, los organismos que tienen que designar oficiales de enlace. Para que la investigación y la inteligencia financiera avancen, se requieren oficinas de enlace en distintos organismos públicos o privados que puedan brindar información permanentemente.

Asimismo, se incorpora a la nómina de organismos a la Inspección General de Justicia, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, a los registros de la Propiedad Inmueble, a la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o sus similares en las provincias, al Ministerio de Seguridad de la Nación y a las fuerzas de seguridad nacionales.

El artículo 13 establece algo muy importante: la prohibición de utilizar la información que recibe la UIF o cualquiera de las personas obligadas a informar para fines que no se vinculen con los de la inteligencia financiera. De tal modo que, al transformarse en ilegal dicha actividad, se establecen fuertes sanciones para quienes utilicen esa información con otros fines.

El artículo 14 establece que las declaraciones voluntarias que recibe la UIF no pueden ser anónimas, con lo cual pretendemos que esta herramienta sea bien utilizada.

El artículo 15 enumera cuáles son los sujetos alcanzados por el deber de informar. Se completa mucho mejor la enumeración actual. Se define el deber de informar y, también, el concepto de cliente. O sea, quién es el cliente, porque al sector privado se le impone la obligación de reportar operaciones sospechosas que realicen sus clientes.

Finalmente, hay una referencia a las personas políticamente expuestas –obviamente, eso nos toca a todos quienes estamos aquí sentados– según la cual, en estos casos, los sujetos obligados deben prestar especial atención a las transacciones realizadas por estas personas que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente.

En fin, el proyecto es bueno. Entonces, como las modificaciones son de envergadura y van a significar que la Argentina no solo mejore sus estándares legislativos y de control sino que podrá tener herramientas suficientes para luchar contra el crimen organizado, nos ha parecido importante que hoy produzcamos la sanción definitiva de esta norma.

Sin embargo, dado que reconocemos que el sistema creado por el GAFI tiene algunas fallas porque se le imponen demasiadas obligaciones al sector privado, nos ha parecido que se deben corregir o aclarar algunos puntos de la sanción de la Cámara de Diputados, a efectos de que dicho sector tenga obligaciones un poco más objetivas.

¿Qué se le pide al sector privado? Que identifique al cliente; que identifique el perfil del cliente; que siga las operaciones de dicho cliente; que, con respecto a toda operación que resulte inusual, observe un poco más y si se cree que puede ser sospechosa de provenir de fuente ilícita, se reporte a la UIF. De tal modo que si bien el sector privado lleva a cabo muy bien ciertas cosas, como identificar al cliente y guardar por cinco años los documentos que reflejan esas transacciones, todo lo que se vincula con determinar si una operación es sospechosa o no tiene una carga subjetiva que es bastante difícil de determinar. Como, además, hay sanciones muy graves para el sector privado que no reportare operaciones sospechosas –en la sanción de la Cámara de Diputados es de una a diez veces el monto de la operación involucrada–, nos ha parecido esencial realizar algunos ajustes.

¿Cuáles son los ajustes que planteamos en la ley correctiva? En primer lugar, en el inciso j) del artículo 6° de la ley 25.246, con relación a la incorporación de estos nuevos delitos, que son las evasiones impositivas y provisionales. Consideramos que la UIF no puede ser una réplica de la AFIP convirtiéndose en otro organismo que se dedica solamente a cobrar impuestos. Entonces, ajustamos para que se involucre solamente en el caso de delitos tributarios graves: evasiones agravadas, ya sean fiscales o provisionales; aprovechamiento

indebido de subsidios; obtención fraudulenta de beneficios fiscales; y asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios. En estos casos, será necesario reportar operaciones sospechosas.

En el artículo 2°, establecemos cuáles son las categorías de sujetos obligados.

Se realiza un ajuste en el inciso 11 del artículo 20 de la ley, con una definición precisa de lo que son las prestatarias o concesionarias de servicios postales. Este fue un aporte del senador Fuentes y de la propia UIF, que nos pidió esa corrección.

En el inciso 12, precisamos un poco las obligaciones de los profesionales. Este fue un pedido tanto de los escribanos como de los consejos Profesionales de Ciencias Económicas, porque tal como quedó la redacción de la Cámara de Diputados, pareciera que los contadores, cuando tienen que asistir al cliente en la preparación de una declaración de impuestos, tienen al mismo tiempo que ir a denunciar a la UIF si creen que hay una evasión impositiva. Este no es el sentido de la norma y por eso es muy importante esta corrección.

Para que quede claro: en la interpretación de esta norma, hay que tener en cuenta que la intención del legislador es ajustar la legislación a las recomendaciones del GAFI. ¿Qué es lo que nos pide el GAFI con relación a los profesionales? Cuando estos profesionales preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con las siguientes actividades: compraventa de bienes inmuebles; administración de dineros, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operaciones o administración de compañías; creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compraventa de entidades comerciales; en estos casos, tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas; no todas las operaciones, solamente las sospechosas.

En el caso de los profesionales de Ciencias Económicas –el senador Verna va a pedir que no lo limitemos solamente a ellos sino que abarquemos a todos los profesionales–, se los incluye cuando actúen como auditores externos de estados contables. En ese sentido, cualquiera sea el profesional que realice tareas de auditoría o sindicatura, que entre también en esta categoría de personas obligadas a reportar operaciones sospechosas.

Otro tema que incorporamos aquí es la exclusión de las terminales automotrices, que estuvieron presentes en la reunión de comisión. Obviamente, no se les puede pedir la identificación del cliente cuando compren materiales de treinta países distintos que, después, son vendidos en el país o cuando exportan. Además, todas sus operaciones son con concesionarias. De modo que los excluimos expresamente.

Agregamos un último párrafo a este artículo 20. Para que, justamente, no sea igual la persecución de un delito grave a la de un delito leve, le estamos dando la facultad a la UIF para que, en cada caso, determine a partir de qué monto tienen que informar las operaciones sospechosas.

En el artículo 3°, disponemos que el oficial de cumplimiento que tienen que designar las distintas entidades, ya sean financieras u organismos públicos, no sea cualquier “pinche” que contratan –una persona absolutamente irresponsable– sino que el oficial de cumplimiento tiene que ser, en todos los casos, integrante titular del órgano de administración del sujeto obligado. La idea es, entonces, que siempre haya una posibilidad de responsabilidad de la persona jurídica o de la entidad.

En el artículo 4°, sustituimos el artículo 21 bis de la ley 25.246, permitiendo que, en algunos casos, se pueda completar la identificación del cliente con posterioridad al cierre de la transacción. Esto es muy importante cuando se hacen transacciones con personas que están ubicadas en distintos países.

Colocamos en cabeza de la UIF la obligación de poner a disposición de los sujetos

obligados la lista de personas políticamente expuestas. Esto es muy importante.

La UIF va a realizar un listado de las personas políticamente expuestas, el cual estará actualizado. Entonces, cualquier empleado de una entidad financiera que está haciendo una transacción podrá consultar inmediatamente *on line* si esa persona está dentro de las personas políticamente expuestas para tener mayor atención sobre la transacción de que se trate.

Establecemos también que los colegios profesionales tienen que llevar a cabo programas de capacitación para que sus matriculados puedan gestionar procedimientos adecuados para la detección de estas maniobras, para que se puedan crear estándares de actuaciones y para que se pueda contar con un software que permita detectar este tipo de operaciones.

A su vez, por sugerencia del senador Morales, se incorporan dos incisos más en los cuales se determina que la Unidad de Información Financiera establecerá los criterios, lineamientos y pautas generales para la fijación de manuales de procedimientos para la prevención del lavado de activos, así como la instrumentación de herramientas tecnológicas que permitan cumplir con todas estas obligaciones y la capacitación del personal para la detección y prevención de maniobras de lavado de dinero.

Finalmente, pasamos al último punto, que es el tema de las sanciones. Como ya había anticipado, las sanciones que contempla el proyecto de la Cámara de Diputados son altísimas; tanto es así que se sanciona de la misma forma a la entidad que comete el delito del lavado de activos que a la entidad que solamente omite reportar una operación sospechosa. Por ello, a nosotros nos pareció que ahí se debía marcar una diferencia, a raíz de lo cual modificamos la escala penal para la omisión del deber de reportar operaciones sospechosas.

De esta manera hacemos una distinción: una cosa es no cumplir con la obligación de reportar una operación sospechosa y otra distinta es algún tipo de incumplimiento de tipo formal. Por lo tanto, no tiene que aplicarse la misma sanción para distintos tipos de incumplimiento.

Establecemos escalas más amplias: un mínimo más bajo y un máximo más alto, y eliminamos la distinción entre conducta dolosa y conducta culposa. Porque si la entidad no reportó una operación sospechosa es muy difícil determinar si no lo hizo dolosa o culposamente.

Creemos que la sanción tiene que ser objetiva y que también debe tener en cuenta el comportamiento o la conducta anterior de la entidad. Entonces, establecemos que si el infractor carece de antecedentes por infracciones a la ley –por ejemplo– y durante la sustanciación del sumario reconoce la materialidad de la infracción, establecemos que la sanción pueda ser menor, reduciéndose por única vez al mínimo legal o reemplazándola por apercibimiento. Y la persona en cuyo órgano se desempeñe el sujeto infractor siempre responde en forma solidaria. Con esto llevamos a nivel legislativo lo que hoy existe a través de un decreto: la solidaridad que existe siempre entre la persona jurídica y la persona que comete la infracción en su nombre o representación.

En el artículo 6° definimos bien el régimen recursivo, lo que es muy importante para el recurso de las multas. Fijamos en 30 días hábiles el plazo para la presentación del recurso, establecemos la aplicación de las normas de la Ley de Procedimientos Administrativos y que la interposición del recurso en cuestión tenga efectos suspensivos.

Por estos argumentos, señor presidente, pido que en primer lugar aprobemos el proyecto que ha sido sancionado en la Cámara de Diputados para que se convierta en ley, a efectos de que la Argentina cumpla con sus compromisos internacionales y, luego, le demos sanción al proyecto de ley correctivo que permitirá una mejor y más racional aplicación de esta norma tan importante.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.

Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: afortunadamente, la ley penal no es retroactiva porque, si no, quienes votamos la ley 26476 –de blanqueo– podríamos estar incurso en el delito que hoy agregamos en el Código Penal.

Adelanto que, obviamente, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley correctivo y también en general el proyecto de ley en revisión, porque nadie quiere que nuestro país sea castigado, aunque sea con una sanción de tipo moral que podría hacer aumentar lo que tengan que pagar los particulares o que podría generar algún perjuicio al país. Pero quiero acentuar que este proyecto de ley es sólo formal dado que no va al fondo del asunto del dinero en negro que viene de la corrupción, de los aviones con droga, del narcotráfico, del juego *on line* –esto lo quiero recalcar– y de la trata de personas.

Por otro lado, considero que el artículo 9° es realmente calamitoso, porque quienes ponen a los funcionarios también los sacan, aunque de por medio haya concursos y exigencias de títulos.

Si bien pueden ser parciales, en los diarios se publican noticias que dicen que ante la UIF tiene coronita el Banco Macro –por ejemplo–, y no otros empresarios que, quizás, estuvieron en la oposición. Digo todo esto en forma potencial, por trascendidos periodísticos o por las mismas versiones de las personas que han sido investigadas. Por ejemplo, esto lo dijo dos veces De Narváez en un programa que fue emitido hace dos noches, por citar a un empresario.

Al margen de la nobleza de los funcionarios del organismo que se encuentran presentes en el recinto en este momento, debemos tener la precaución de que la UIF no se conforme en un instrumento perseguidor de opositores.

Por otra parte, quiero desterrar esa idea de que este organismo internacional es una especie de *sacro sanctorum*, porque no es así. En primer lugar, no tiene facultades ejecutivas y no nos puede amenazar con nada concreto.

En América Latina solamente cuatro países estamos en el GAFI, y estamos allí por propia elección y porque –como dijo muy bien la presidenta de la comisión– queremos estar sentados en la mesa de los grandes; pero Chile –por ejemplo– no está, y creo que Chile también está sentado en una mesa grande. De América latina estamos allí México, Brasil y Argentina. Ecuador estaba observado porque se decía que allí se lavaba dinero y, entonces, dijo que si el GAFI le probaba que perseguía el lavado mejor que ellos entonces entrarían; si no, no lo harían.

Hay algunas posturas del GAFI que pueden molestar con razón a muchas personas en nuestro país, pero de todas maneras voy a apoyar el proyecto de ley en revisión en general –no en particular el artículo 9°–, y el proyecto de ley correctivo en especial.

Y también quiero dejar asentado en la versión taquigráfica que si el caso del presunto lavado de dinero público por parte del señor Schoklender hubiese sido difundido o estallado antes de la aprobación de este proyecto por parte de la Cámara de Diputados el texto no hubiera salido tal como salió. Porque esta presunta utilización del dinero público por parte del señor Schoklender determina una óptica distinta sobre todo este tema y nos hace poner el lápiz sobre la gran pregunta de quién custodia al custodio.

Por otra parte, quiero quejarme aquí por lo que sucedió con una diputada con quien no coincidí ideológicamente: me refiero a la señora Elsa “Tata” Quiróz. Ella denunció este tema de Schoklender y no le contestaron; pero, además, fue observada. Es una persona impecable y magnífica que desde 1976 hasta 1983 sufrió cárcel y tortura.

Por lo tanto, pienso que no podemos ser tan livianos respecto de este tema. Y digo con todo respeto hacia los señores aquí presentes, quienes no tienen la culpa de nada pues fuimos

nosotros los que nos incorporamos al GAFI y aprobamos la Ley 26.476 de blanqueo; me refiero a los que la votaron, ya que muchos senadores no lo hicieron.

También, quiero que todos tengamos presente el artículo 3° de la Ley 24.759 – Convención Interamericana contra la Corrupción–, pues echa luz sobre el tema y amplía el criterio de quién es funcionario público. Según la mencionada norma, la persona que tiene en sus manos el dinero del Estado –o sea, de la gente– también cumple una función pública. Hago esta aclaración por el caso que mencioné, porque puede haber muchos otros afines.

Para finalizar, reiteraré la pregunta que hice anteriormente: quién custodia al custodio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo que se dé lectura a la lista de oradores, a efectos de cerrarla y de estimar la hora de votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.

– *Asentimiento.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Están anotados los siguientes senadores: Ríofrío, Sanz, Bongiorno, Di Perna, Fuentes, Romero, Cimadevilla, Estenssoro, Cano, Giustiniani, Rodríguez Saá, Morales, Pichetto y Negre de Alonso.

Sra. Escudero. – Señor presidente: y yo cerraría antes de los presidentes de bloque.

Sr. Presidente (Pampuro). – Hay 14 senadores inscriptos.

Se va a votar el cierre de la lista de oradores.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, queda cerrada la lista de oradores con los senadores mencionados.

Tiene la palabra la señora senadora Ríofrío.

Sra. Ríofrío. – Señor presidente: tal como expresó la miembro informante senadora Escudero, este tema es prioritario, un tema de Estado. En tal sentido, quiero dejar sentado que tanto es así que la señora presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar el período ordinario de sesiones de 2011, recomendó la aprobación del dictado de esta ley, para poner a la Argentina dentro de los estándares internacionales en cuanto a la persecución de los delitos del lavado de activos y de promoción del narcotráfico.

Como todos sabemos, las pautas internacionales las establece el GAFI. Ese es el organismo que fija las formas para atacar este tipo de delitos. Hasta hoy, la Ley 25.246 –que es la que rige esta temática– simplemente atacaba el delito de lavado de activos sólo ante la existencia de un delito previo. En consecuencia, si no se establecía el delito previo, el lavado de dinero no podía ser perseguido como delito autónomo. Por lo tanto, creo que a través de la modificación que se propone realmente estamos dando un salto cualitativo.

El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados que hoy estamos considerando y el proyecto de ley correctivo creo que también serán importantes. En ese sentido, fueron sugeridas algunas modificaciones por los sujetos interesados, quienes vinieron –como expresó la senadora Escudero– al seno de la comisión y dieron su opinión; otras modificaciones fueron propuestas por senadores de la oposición. Por estos motivos pienso que es realmente importante que aprobemos estas iniciativas.

Todos sabemos que este tipo de delitos ponen en riesgo económico y financiero a los estados o países y, sin duda, provocan inestabilidad en las sociedades. Según las estimaciones de los organismos internacionales, el lavado de activos mueve, aproximadamente, un millón y medio de dólares, lo que produce sin dudas un desequilibrio muy grande en las finanzas nacionales. Al estar tipificado el lavado de activos como una forma de encubrimiento, esa acción estaba siempre referida a operaciones delictivas realizadas por otros, porque de ninguna forma puede encubrirse un delito cometido por uno mismo. Por tal razón, la “media

sanción” crea un bien jurídico en el Código Penal bajo el título delito contra el orden económico y financiero, concepto que es receptado por legislaciones de otros países. Es una forma de independizar la figura del lavado de la del encubrimiento.

Esta modificación permitirá el castigo del denominado autolavado; es decir, aquellas acciones tendientes a ocultar el delito previo que ha sido realizado por la misma persona que intenta hacer el lavado de los activos.

Las cuestiones más destacadas que establece el proyecto con sanción de la Cámara de Diputados fueron mencionadas pormenorizadamente por la senadora Escudero, no obstante lo cual quiero destacar algunas. Se propone la incorporación de personas jurídicas como posibles autores de las acciones punibles. El decomiso anticipado es una herramienta sumamente importante que se da a los jueces para que, realmente, los derivados de este delito no se diluyan con el paso del tiempo y del proceso penal. Se amplían también las facultades de la UIF –Unidad de Información Financiera– para concentrar en ella toda la información relativa al lavado de dinero. Y, además, también se modifica el procedimiento de la designación de las autoridades de ese organismo.

Honestamente, no comparto en absoluto las apreciaciones de la senadora que me precedió en el uso de la palabra. Creo que con esta herramienta se está dando transparencia y el ámbito en que se establece el concurso público, que es el Ministerio de Justicia, es el correcto.

También me parece sumamente importante el artículo 14. Allí se impide que se opongan el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional y los compromisos legales o contractuales de confidencialidad a un requerimiento de parte de la UIF.

En el proyecto se agregan también normas procesales para que los jueces tengan facultades y herramientas para preservar los bienes, como dije hace un momento.

Realmente, creo que la senadora Escudero ha sido muy justa en cuanto a su apreciación sobre la preocupación de la Argentina por estar dentro de los niveles internacionales. Y hoy realmente es para mí una satisfacción muy grande dar cumplimiento a la preocupación puesta de manifiesto por la presidenta en el momento de inaugurar el período legislativo.

Creo que esto realmente será un salto cualitativo para la persecución –que, sin duda, es responsabilidad del Estado– de este tipo de delito con características realmente complicadas para su persecución y que, como dije hace un momento, pone en riesgo la estabilidad de la sociedad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: después de las palabras de la miembro informante, lo que corresponde es hacer algunas reflexiones sobre cuáles son las cuestiones sobre las que pretendemos hacer hincapié, adelantando –como lo dijimos en la reunión de comisión– que nuestro bloque va a apoyar tanto la sanción de la Cámara de Diputados como la del proyecto correctivo.

La primera reflexión es que hacer análisis sobre lo que ha pasado en todos estos años no tiene que llevarnos a colocarnos en el papel de echarnos culpas o de defendernos desde los distintos gobiernos. Este es un problema de actitud institucional y, quizás, en todo este tiempo no nos hemos dado cuenta –también lo digo institucionalmente– de la importancia que tiene esta cuestión. Y nos dábamos cuenta –como bien lo ha reflejado la senadora Escudero– cuando cada dos años, los funcionarios, fueran del gobierno que fuesen, tenían que concurrir al GAFI, y ahí es donde aparecían los reproches o los deberes no hechos. Por eso es que hoy también legislamos casi contrarreloj, como si no hubiera una actitud institucional diferente.

Por lo tanto, digo que este es un avance institucional y tenemos que valorarlo positivamente. En esto estamos todos de acuerdo y debemos reflejarlo claramente. Pero la reflexión más importante que puedo hacer en nombre de mi bloque es que, aun siendo un avance que facilita la labor tanto de la UIF como de la Justicia, la configuración del lavado como delito autónomo establece un marco teórico imprescindible. Digo esto porque cualquier buena voluntad o actitud de persecución, de investigación y de juzgamiento de este tipo de delitos, al no contar con este marco teórico que es el delito autónomo, hubiera llevado a consecuencias como las que se reflejan por allí o las que se han reflejado en el debate de comisión: o sea, hechos que la Justicia luego no podía juzgar si no era nada más que como un encubrimiento.

En consecuencia, el marco teórico que sancionaremos es absolutamente imprescindible y ya nadie, a partir de hoy, podrá tener la excusa de que no hay una legislación adecuada para investigar y para juzgar el delito de lavado.

No obstante, lo más importante no es el marco teórico —y acá es donde vuelvo sobre actitud institucional—, sino el marco práctico que implica la decisión institucional, tanto administrativa como judicial, de perseguir, de investigar y de juzgar al crimen organizado. Esta es la reflexión más trascendente, porque de nada serviría que el 22 de junio fuésemos a la reunión del GAFI llevando esto como una suerte de respuesta u ofrenda institucional si luego, en la práctica, no existiera esa actitud institucional. No quiero echar las culpas o cargar contra nadie en particular. Si tuviera que hacerlo en particular contra alguno de los poderes del Estado, lo haría más sobre el Poder Judicial que sobre cualquiera de los otros, inclusive hasta aquí.

Y quiero profundizar la reflexión precisamente por esto que acabo de decir del ámbito del Poder Judicial, porque en la Argentina —y en esto nos tenemos que hacer cargo todos, reitero una vez más, desde el aspecto institucional— se hace muy difícil llegar a la condena de los hechos delictivos comunes. Hoy, antes de entrar en la sesión, mirando al pasar los noticieros de televisión, escuché una noticia infausta desde este punto de vista: ha prescripto la causa LAPA, un accidente gravísimo, con consecuencias luctuosas, con muchas víctimas. Sin embargo, ha prescripto la causa, lo que significa que hay impunidad por el paso del tiempo. La prescripción es eso: impunidad por el paso del tiempo.

Entonces, creo que este tema merece la siguiente reflexión: si en la Argentina es difícil llegar a la condena, es decir al momento final del juzgamiento de los delitos comunes, mucho más lo es cuando se trata de delitos complejos y donde se investiga el crimen organizado. Y aquí, precisamente, estamos hablando de eso: de la tipificación autónoma de un delito que tiene por objetivo perseguir, juzgar y condenar al crimen organizado en un aspecto de los tantos que involucran al crimen organizado, como es el lavado de dinero.

Por eso, desde nuestro bloque pretendemos presentar esto más que como una suerte de cumplimiento institucional y de liberación de una carga para que el 22 de junio podamos presentarnos como país en el GAFI como un desafío. Porque nos importa mucho más la conducta práctica de aquí hacia adelante del Estado en su conjunto que el marco teórico. Y para ello vuelvo a poner el acento en el Poder Judicial que, según me parece, es el gran destinatario de esta reforma.

De todas maneras, es cierto lo que dijo la senadora Escudero: quedan muchas cosas por corregir, quedan muchas cosas por cumplir, si uno toma en cuenta las objeciones a nuestro país que se han hecho en las últimas reuniones del GAFI.

Sobre el proyecto en sí, al margen de esta reflexión general, quiero volver con algo que dijimos en la reunión de comisión, que tiene que ver, también, con una cuestión muy argentina, muy propia, muy nuestra. Nosotros estamos avanzando en la legislación en función

de consideraciones o recomendaciones que son universales; es decir, el GAFI las hace para todos los países suscriptores o partícipes. Nosotros, además de aceptarlas y reconocerlas, tenemos que adaptarlas a nuestra propia idiosincrasia. No es lo mismo en cualquier lugar del mundo aceptar estas recomendaciones, como si todos los países fuéramos iguales, todas nuestras instituciones funcionaran de la misma manera y todas nuestras idiosincrasias fueran iguales. Entonces, la reflexión que hice en la comisión la vuelvo a hacer acá.

Nosotros estamos creando un organismo que tiene inmensas facultades. Nosotros estamos dándole a la UIF una cantidad de atribuciones y de facultades que la convierten, sin lugar a dudas –y no me corro un milímetro de lo que voy a decir– en, quizá, uno de los organismos que va a tener mayores atribuciones de investigación, de avance sobre derechos individuales y derechos colectivos, sobre la vida de la sociedad; tanto como no las tienen otros organismos del Estado. Me atrevo a decir que va a tener más atribuciones y habrá más peligro aún en esas atribuciones que la propia AFIP. Porque la AFIP es una institución que, por su naturaleza, por su tradición, por su conformación, incluso, organizacional y de recursos humanos, tiene hasta una suerte de autocontrol. Es muy difícil para alguien que esté en la AFIP, por el volumen, por la magnitud que tiene un organismo como la AFIP, excederse en las atribuciones. Salta a la vista. Es decir, son organismos que tienen una suerte de antídoto automático, de autodefensa. Pero acá, la UIF es un organismo pequeño, es un organismo con una concentración muy potente y, a la vez, con un plexo de atribuciones muy grande. Entonces, insisto, obviamente esto tendrá que ver con algún debate posterior que tendremos que dar algún día, de acuerdo a cómo nos vaya en el tiempo, para mí esto debería ser algún órgano extra poder. Este es un caso típico de un órgano extra poder. En la República Argentina, organismos que tienen semejante poder, valga la redundancia, deberían estar alejados del poder para ser órganos con poder en sí mismos.

La senadora Bortolozzi, más allá de que uno pueda compartir o no cómo lo dijo –yo tampoco comparto tal cual presentó ella el tema–, puso el dedo en la llaga en un punto: en la designación o en la configuración de los funcionarios. La ley avanza en la designación, es decir que nosotros, hoy, estamos creando requisitos para ser parte del directorio del organismo, que son muy valiosos, que yo los comparto y por eso los estamos votando. Pero fíjense, no tiene el mismo correlato para el egreso. O sea, las particularidades del ingreso no tienen el mismo correlato para el egreso. En un órgano extra poder esto está salvado, porque el egreso, es decir, la posibilidad de que el funcionario deje de estar en el organismo, ya no depende del Poder Ejecutivo sino de otros mecanismos institucionales. Caso concreto, por ejemplo, el de la Auditoría General de la Nación, que es un procedimiento parlamentario.

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Sanz: el senador Pichetto le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Sanz. – Sí, con todo gusto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece realmente muy importante lo que el senador Sanz acaba de plantear: cuál es la naturaleza jurídica de este organismo, en qué lugar del escenario institucional debe estar ubicado.

La verdad, yo lo considero un órgano del Poder Ejecutivo; no puede estar en otro lugar que no sea éste. Tiene autarquía, tiene autonomía; pero indudablemente, tiene que tener una dependencia funcional e institucional con el Poder Ejecutivo nacional, con las instituciones del país. No puede funcionar en el Parlamento. Tampoco es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con una posición del gobierno frente a temas internacionales e internos.

Entiendo hacia dónde va dirigida su reflexión; pero colocar a la UIF en otro lugar o

bajo contralor de un órgano como el Parlamento, lo transformaría en un organismo totalmente ineficaz. Es decir, hace a las políticas públicas y, fundamentalmente, al rol que debe tener el Poder Ejecutivo de cara un tema altamente sensible como es la lucha contra el delito organizado y el lavado de dinero.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Podríamos seguir toda la tarde porque el senador Pichetto ha metido el dedo en la llaga en una discusión que hemos dado en los últimos años: la diferencia entre gobierno y Estado; la diferencia entre políticas públicas de un gobierno y políticas públicas del Estado. Yo estoy hablando desde las políticas públicas del Estado y el senador Pichetto acaba de defenderlo como política pública de un gobierno.

Y, con todo el respeto, obviamente esto es muy bueno en el debate político, esto está fuera de la política pública de un gobierno, esto tiene que ser política pública del Estado, que somos todos.

Sr. Pichetto. – Hablo del gobierno de cualquier signo político al que la ciudadanía le otorgue el poder de gobernar.

Sr. Sanz. – Yo también. No es este un debate entre el kirchnerismo o el gobierno actual y los opositores actuales, sino que esto está fuera de cualquier gobierno, del actual, del que venga y del que venga después. Precisamente por eso, porque tiene que estar fuera de cualquier gobierno, tiene que ser una política de Estado, porque el Estado está por encima de cualquiera de los gobiernos. Por eso es que debe ser un órgano extra poder porque, si no lo fuera, al estar sometido a la política de un gobierno, ésta puede ser subjetiva en un tema en el que no podemos caer en subjetividades.

¿Cómo puede ser tomado que un gobierno disponga la persecución de una investigación subjetivamente cuando, en verdad, se trata de perseguir objetivamente el delito del lavado o el crimen organizado? Es una posición que da para mucho debate pero, como dije en la comisión y lo quiero reiterar aquí, no por casualidad el licenciado Juan Félix Marteau, que vino a la comisión y que –a mi juicio– es una de las personas que más sabe de esta cuestión en la Argentina, hizo hincapié en que esto debería servir para profundizar la lucha contra el crimen organizado y no para otras cosas. También hizo mención a cuáles son las otras cosas en donde hay que tener mucho cuidado en que el gobierno no mezcle las cuestiones de Estado.

Otra cuestión que señalé en la comisión –pero que, probablemente, la planteé mal, porque ahora, al leer los artículos, no la encuentro bien, quizás la senadora Escudero me puede ayudar– es la posibilidad de que la UIF, además del porcentaje que tiene asignado del presupuesto nacional, utilice el producido de las multas para su propio funcionamiento. Eso creo que está en el artículo 20. Si bien no dice expresamente que va a ir para la UIF, lo crea como un fondo especial.

No soy amigo de estas cosas, nuestro bloque nunca fue amigo de permitir que los organismos tengan potestades recaudatorias que luego se transformen en ingresos de su propio patrimonio. Di en la comisión, y lo vuelvo a repetir aquí, el viejo ejemplo de esas policías de pueblo, a las cuales la legislación les da la posibilidad de cobrar multas de tránsito y uno encuentra siempre al policía escondido detrás del árbol para cobrar una multa, total, eso es lo que le permite subsistir. Es decir, se genera una suerte de círculo vicioso en esto que no creo que sea conveniente.

Por otra parte, se elimina como herramienta a la denuncia anónima, la cual, en este tipo de situaciones, es muy valiosa. Si bien la denuncia anónima en materia de la investigación en la justicia ordinaria no es un elemento configurativo importante, cuando uno tiene en la vereda de enfrente al crimen organizado, la denuncia anónima es una herramienta

que no habría que descartar. Lo dejo planteado, porque también debo decir –y ahora sí sobre la ley correctiva– que todas estas cosas me hubiera gustado mucho plantearlas, pero soy consciente de que hay un avance institucional muy fuerte en la Cámara de Senadores. Quiero reflejarlo positivamente, hemos sido capaces de absorber el impacto temporal de darle media sanción a una ley porque hay un plazo, pero también hemos sido capaces, en el mismo momento, de presentar una ley correctiva, porque nos hemos dado cuenta de que la ley necesita corrección. Entonces, también hemos llegado a la conclusión de que esa ley correctiva no tendrá todas las cosas que a nosotros nos gustan pero, por lo menos, queríamos dejar sentado acá algunas de ellas.

Con estas reflexiones, adelanto el voto favorable de mi bloque tanto para este proyecto de ley como para el proyecto de ley correctiva.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: comparto algunas consideraciones que hizo recién el senador Sanz. En cuanto a la vieja discusión entre gobierno y Estado, comparto con el senador presidente del bloque del Frente para la Victoria que un organismo como la UIF debe depender de políticas públicas que lleve adelante un gobierno. Y el gobierno de tal signo político le dará mayor o menor injerencia a las políticas públicas que lleve adelante o que crea conveniente darle mayor énfasis.

Volviendo al tema del proyecto, no voy a incursionar mucho en cuestiones técnico-jurídicas, ya que la senadora Escudero ha hecho una muy valiosa descripción del proyecto, pero creo, además de esto, que hoy estamos frente a un momento realmente imprescindible dentro de lo legislativo o normativo. Hoy le estamos dando a la UIF, dentro de las consideraciones que nos ha pedido el GAFI, un proyecto que es imprescindible, modernizador y moralizador. Estamos frente a un delito sumamente complejo y transnacional. ¿Qué significa transnacional? Esto es que, a partir de las nuevas economías y operaciones financieras, se han desdibujado las fronteras entre los países y las nuevas tecnologías han permitido que se hagan operaciones dentro de lo económico con muchísima más agilidad y salteando aquellos poderes de control que antiguamente se daban. Creo que, en este proyecto, estamos llevando adelante uno de los más valiosos aportes, que es la autonomía del delito del lavado de activos de ilícitos que ingresan al mercado en forma lícita.

No quiero hacer una exposición histórica, pero todos sabemos que este delito viene desde la Edad Media, desde los mercaderes y usureros, con la prohibición del cobro de intereses, que fueron prohibidos desde lo económico y religioso con varias sanciones –desde la excomunión, la prohibición de que a uno lo enterraran en cementerio cristiano, desde Carlos Magno–. Pero en realidad, esto tiene mucho que ver con la mafia en sus primeros tiempos y con la denominación del lavado de activos o lavado de dinero, y viene de la época de Al Capone, cuando él convertía el dinero que había traído en forma ilícita al mercado lícito proveniente de su lavado en tinte de sus empresas textiles. Allí comienza el término de lavado de dinero, obviamente no con las connotaciones que hoy tiene y con un delito tan complejo como venía refiriendo.

Quiero hacer una salvedad. Nosotros, en la Argentina, siempre hemos tomado los antecedentes internacionales y llevado adelante un compromiso muy fuerte desde lo nacional e internacional en cuanto a combatir también la otra pata, que es el financiamiento de las redes de terrorismo. En este sentido, tenemos tres patas dentro de las que debemos llevar adelante la política pública o de Estado. Una de ellas se corresponde con lo que es la política pública del Poder Ejecutivo, que se ha dado en un pedido expreso de la presidenta en su discurso de apertura de sesiones, que también tiene que ver con un pedido del GAFI para que nosotros no entremos en la zona gris de países como Angola, Ecuador, Honduras. Creo que es

necesario definir una política pública con un mayor sostenimiento en el tiempo. Y se ha dado el compromiso en el combate de los dos puntos, no solamente con respecto al lavado de activos del que estamos hablando, sino también de las redes del terrorismo.

Sabemos muy bien que el terrorismo se enquistó en países como el nuestro – desgraciadamente, tuvimos dos hechos lamentables, con 114 víctimas–, y es uno de los flagelos que tiene que ver con el combate del financiamiento de este complejo que engloba el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el tráfico de armas. Tenemos que buscar desde la política pública, y hemos encontrado, desde el gobierno, que hay que evitar y castigar el terrorismo de Estado impidiendo el financiamiento de redes terroristas que producen hechos como los ocurridos en nuestro país en dos oportunidades.

Por otro lado, tenemos un organismo, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera. Esta entidad, en un primer momento, cumplía una función administrativa, que era la de llevar adelante los reportes operativos financieros. A partir de 2010 y con los potenciales de la ley 25.246, que eran muy acotados, ese organismo toma la ley, trata de presentarse y de adquirir mayor control sobre lavado de activos. Así lo hace, presentándose también como querellante en cinco causas penales, y colabora en la investigación de setenta causas. Pone énfasis en el ejercicio del poder de policía y, por primera vez en los diez años de funcionamiento de la UIF, se establece una multa a un banco en la Argentina. Hoy, la cantidad de pesos por los que la UIF ha multado, por operaciones sospechosas que no se han dado a conocer, es de 115 millones. Creo que, teniendo en cuenta lo acotado de la normativa y de la valoración normativa, que dentro de todo, tiene nuestro país, la UIF ha tratado de compensarlo con un responsable ejercicio del poder de policía.

Por otro lado el Poder Judicial, va a tener ahora las herramientas para accionar de manera activa, a través del decomiso –del que hablaba la senadora Escudero–, sin que haya una causa penal. También, lo podrá hacer con una normativa vigente *aggiornada* a los requerimientos internacionales.

El compromiso tiene que asumirse desde los tres poderes. Nosotros debemos seguir con el trabajo, porque creemos y sabemos que esta no es la ley óptima, que se podría llegar a mejorar, pero que hoy estamos aprobando una iniciativa para cumplir con determinados estamentos internacionales y para hacerla efectiva; si no, realmente, no tendría sentido. Por otro lado, habría que pedirle al Poder Judicial que haga uso de las normas que le estamos dando. Porque de 10.300 reportes operativos sospechosos, se pidió a la UIF que investigara mil, de los cuales solo hubo condena en una causa y no fue un gran narcotraficante sino un parrillero de la ciudad de Córdoba.

Quiero adelantar mi voto positivo, tanto a la sanción de la Cámara de Diputados como a este proyecto elaborado en la comisión. Pero, también, quiero hacer un comentario: por ahí, se ha dicho que el gobierno no le ha puesto demasiado énfasis y que hoy estamos apurados por aprobarlo porque nos corren los organismos internacionales. Y me quiero permitir leer algo. “Enfrentamos al terrorismo internacional, a la delincuencia transnacional organizada y al narcotráfico. Alentamos todas las acciones internacionales que contribuyan a la persecución, control y eliminación de estos flagelos pero respetando el derecho internacional de los derechos humanos”. Doctor Néstor Kirchner. Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1° de marzo de 2006.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo, tanto para la sanción que viene de la Cámara de Diputados como para la ley correctiva que se ha trabajado en la comisión.

Si bien ya ha sido señalado, considero importante reiterar que, más allá de que esta

iniciativa constituye un adelanto que establece un marco normativo y una tipificación del delito de autolavado muy importante, así como un marco regulatorio para la UIF, que le da mayor fortaleza y autarquía, es claro que esta ley, por sí misma, no va a convertir a la Argentina en un país que efectivamente esté decidido a combatir el lavado de dinero y a las organizaciones y a las redes internacionales del crimen organizado si no existe una decisión política y judicial en tal sentido en nuestro país.

Al respecto, quiero hacer referencia a un informe publicado por las Naciones Unidas, así como a ciertas entrevistas que he tenido con los expertos de dicho organismo en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En 2000, Naciones Unidas estableció la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, la cual fue ratificada por 107 países, entre ellos, la Argentina. Esa convención identifica, además del lavado de dinero, a veintidós delitos que se encuentran relacionados con el crimen organizado transnacional.

Un estudio de las políticas que se han implementado en los países que han sido eficaces en el combate contra estas organizaciones demuestra que hay tres cosas importantes que se deben llevar a cabo. En primer lugar, se deben instrumentar reformas en los procedimientos judiciales para reducir los abusos y las arbitrariedades de los jueces en materia de hacer avanzar las causas o de no hacerlo. Aquí ya se ha dicho que, en la Argentina, existen poquísimas causas en las que se han dictado fallos y condenas en casos de corrupción, de lavado de dinero y de narcotráfico. Es más, hace poco no solamente prescribió el caso de LAPA, sino también el vinculado con el Banco Nación e IBM. Es decir que, en materia de casos de corrupción manifiesta, la Argentina tiene un prontuario y antecedentes muy negativos, no existiendo una voluntad judicial ni política en tal sentido. Además, lamentablemente, sabemos que en la Argentina la justicia está demasiado controlada por la política, a pesar de que no debería estarlo; sin embargo, está muy condicionada por aquélla. Entonces, una de las medidas importantes que se debe tomar es la implementación de cambios en los procedimientos judiciales, para que los jueces no puedan actuar con tanta arbitrariedad como para determinar qué causas pueden avanzar y cuáles cajonear.

En segundo lugar, cabe señalar que el aumento de las condenas judiciales se produce cuando existen mecanismos de inteligencia financiera –este es el rol de la UIF– que aportan pruebas contundentes para desbaratar a esas redes criminales y confiscar, también, sus patrimonios y sus activos. En este sentido, se dice que esta parte es la más importante porque, en el pasado, cuando se luchaba contra el narcotráfico y el crimen organizado, a veces, se buscaba identificar a un pez gordo, se lo capturaba y se lo extraditaba a otro país, pero eso solamente aumentaba el problema, si es que no había una identificación de todos los recursos, el patrimonio y los bienes de esa red criminal y se lograba su confiscación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en tal caso? Que al líder de la mafia –por ejemplo, a Pablo Escobar o a quien fuera– se lo puede sacar del medio pero, luego, surge un nuevo líder que tiene todos esos bienes y activos que le permiten seguir corrompiendo a la política, a la justicia y a la policía para que esos crímenes gocen de impunidad en los distintos territorios.

Entonces, el rol de organismos como la UIF es fundamental. Por ello, también recomiendan que haya unidades de inteligencia patrimonial que trabajen en conjunto, para que estas causas judiciales sirvan no solamente para encarcelar a grandes tiburones sino para dismantlar este blindaje económico que les permite actuar con gran facilidad en países con alta corrupción como, lamentablemente, es el caso de la Argentina.

El tercer punto para ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado es tener programas de protección masivos para los sectores vulnerables, porque los sectores vulnerables, los jóvenes, especialmente con las redes de trata, la venta ilegal de armas y el

narcotráfico, son –y lo digo con todo respeto y dolor– la mano de obra descartable de estas organizaciones, y es lo que está pasando en la Argentina.

Quiero remarcar estos tres puntos para ver cómo en nuestro país no se está llevando a cabo ninguno de ellos. Es más, este informe de Naciones Unidas señala que entre los países que han ratificado la Convención de Palermo, Brasil, por ejemplo, tiene un incumplimiento de sus normas de un 40 por ciento, Paraguay de un 60 por ciento y la Argentina de un 79 por ciento. O sea, no estamos solamente en la lista negra del GAFI sino que hoy somos un país que está siendo observado por Naciones Unidas y los organismos internacionales por lo que llaman la parálisis y la involución en una lucha efectiva contra las redes internacionales del crimen organizado.

Hace poco en la Comisión de Justicia tuvimos una muy interesante reunión sobre la falta de radares. Desde hace veinte años escuchamos que hay que radarizar el país. Los gobiernos de Menem, de Duhalde y de los Kirchner han dicho que se había avanzado pero los radares no aparecen. Se decía en la reunión que no solamente aterrizan las avionetas sino que también tiran la droga desde los aviones.

Yo recorro las villas de emergencia de Buenos Aires y sin duda se advierte que son zonas liberadas. He visto autos enormes con matrículas extranjeras, típicos de “narcos”, y he visto a quienes venden la droga. La pobre gente que vive en la villa, cuyos hijos son víctimas de estas organizaciones, no sabe qué hacer, porque ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad se ocupan de estos temas. Son zonas liberadas para que los “narcos” operen con toda libertad. No existen estos programas masivos que protejan a los sectores más vulnerables de convertirse en la mano de obra descartable de estas organizaciones.

Por eso es importante señalar que nuestro país no está haciendo lo suficiente para evitar terminar siendo un país como México. Hay que resaltar que el crimen organizado hasta los años 80 estaba concentrado en algunas familias, en algunos carteles y en algunas regiones geográficas, pero después de los 80 aparecieron organizaciones globales porque la economía se globalizó, el mundo se globalizó.

Estas organizaciones criminales, como decía antes, florecen en países con alta corrupción porque financian la política. Por lo tanto, tenemos que prestarle muchísima atención a estos temas. Los organismos gubernamentales, la Justicia, la UIF tienen que mostrar una vocación incansable e infatigable de perseguir estos delitos, lo cual hoy no se ve en nuestro país.

Quiero terminar mi exposición señalando –me alegra que esté presente el señor Sabatella en el recinto– que llama poderosamente la atención que durante un año no se hubiera prestado atención a las denuncias que hicieron mis compañeras de la Coalición Cívica las diputadas Elsa “Tata” Quiroz y Maricel Etchecoin sobre el origen injustificado del patrimonio del señor Sergio Shocklender y que la UIF no hubiera respondido hasta ahora. Hoy hablé con la diputada Quiroz y parece que el señor Sabatella ha ordenado al fiscal Pleé que empiece las investigaciones. Pero seguramente hubiera sido mucho mejor si esta investigación hubiera comenzado por propia iniciativa de la UIF y no después de toda la repercusión periodística que hemos visto en los últimos días, porque eso hubiera mostrado la vocación real de un organismo clave de investigar operaciones en las que no es claro de dónde provienen los fondos.

También quiero decir que la Coalición Cívica va a poner especial énfasis, y tomaremos todas las medidas del caso, para que la Auditoría General de la Nación investigue si no ha habido fondos de la organización Madres Plaza de Mayo que llegaron indebidamente a las cuentas bancarias del señor Shocklender, porque creo que tenemos que ser muy rigurosos; y esto también lo sancionamos el año pasado en la ley de acceso a la información

Pública.

Es importante que exista una total transparencia, y esto tendría que ser algo que esté publicado en Internet y que sea actualizado permanentemente; tienen que figurar cuáles son los montos de subsidios que reciben empresas privadas pero también las organizaciones sin fines de lucro y cooperativas. Eso era parte de aquella política de transparencia activa que incorporamos en esa ley que espero que la Cámara de Diputados sancione a la brevedad.

Espero que los organismos públicos publiquen en Internet todas esas transferencias de recursos para que podamos tener un mucho mejor control de los fondos públicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

Sra. Di Perna. – Brevemente, quiero dejar sentada la posición del sector que represento en este tema.

Esta tarde estamos tratando aquí, en el Senado, una norma que pretende establecer cambios de fondo en un delito complejo que tiene que ver con el crimen organizado y con actividades relacionadas con el narcotráfico, 00la trata de personas, la corrupción y el terrorismo.

Como se dijo aquí, la situación de la República Argentina en esta temática es apremiante, tanto es que así que en los últimos once años solamente ha habido una condena por este tema, y no precisamente de aquéllos que han traído su dinero de paraísos fiscales.

Considero que esta norma es buena, que es un avance –como dijo el señor senador Sanz–, y desde nuestro sector la vamos a apoyar, tanto a la que fue sancionada en la Cámara de Diputados como a la norma correctiva que se votará hoy, pero también quiero dejar establecido que hay algunas cuestiones que son inquietantes. En primer lugar, el tema que ya se mencionó del GAFI; que, por indicación del mismo, si no cumplimos hoy en este Senado en sancionar esta norma, nuestro país pasará a integrar una lista negra. Consideramos que ese no debe ser el motivo de esta aprobación. El motivo de todos nosotros, como senadores que nos encontramos aquí en representación de nuestras provincias, tiene que ser la íntima convicción de esta necesidad normativa en nuestro país.

El otro tema también inquietante es que no solamente el tener una norma va a significar menor delito, sino que realmente necesitamos un Poder Judicial independiente y ágil para que la misma se materialice y se lleve a la práctica.

También es importante destacar lo que se habló respecto a la UIF. Consideramos que los cambios que se proponen son positivos. No es posible que un organismo de estas características tenga el 90 por ciento de su presupuesto comprometido en salarios y que más del 90 por ciento de sus trabajadores no sean profesionales o estén en una situación laboral de inestabilidad. Por lo tanto, quiero adelantar el voto afirmativo con estas observaciones.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Verna. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Permite la interrupción, senador Fuentes?

Sr. Fuentes. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Como dijo la miembro informante, yo iba a hacer una propuesta, y como no había pedido la palabra pedí una interrupción.

El proyecto correctivo hace referencia a los profesionales que están alcanzados por la necesidad de informar a la Unidad de Información Financiera en los términos del artículo 21, y quiero decir que en la reunión de comisión se produjo un debate entre los profesionales de las Ciencias Económicas en relación a la redacción.

El inciso 12) del artículo 2°, al hacer referencia a los profesionales de las ciencias económicas, dice en su último párrafo que, en el caso de los profesionales de ciencias

económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables.

En realidad, en la actualidad las sociedades tienen síndicos, y síndicos colegiados. Hay síndicos contadores y síndicos abogados. Y nadie me ha sabido expresar a mí, que soy ingeniero y no debo defender a los contadores –supongo que esa será tarea del senador Morales–, por qué incluyen a los síndicos contadores y no incluyen a los síndicos abogados.

En los cinco años de ejercicio de profesión, esto ha hecho que la mayor parte de las empresas que tienen sindicatura colegiada tengan solamente síndicos abogados en virtud de que no están obligados a denunciar. Sin embargo, todos sabemos que las sindicaturas son las que controlan esta clase de informes.

Una razón que en voz baja dieron en el seno de la comisión es que se debe a que la mayoría de los legisladores son abogados.

Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Verna. – Sí, cómo no. Le concedo una interrupción de la interrupción para ver si me lo puede aclarar.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos a ejercer la defensa corporativa. El senador Morales de los contadores y yo la de los abogados.

No se trata de que se nombre síndicos a los abogados porque están obligados a no denunciar. En verdad, el abogado está obligado a no denunciar en una causa en la que actúe como abogado y en defensa de los derechos de su defendido. No es el caso cuando actúa como síndico en una empresa. En ese caso, tiene la obligación de hacer la denuncia como cualquiera.

Sr. Presidente (Pampuro). – Sigue en el uso de la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Entonces, ¿por qué no se aclara de manera explícita en un inciso 12 bis o 13, desplazando la totalidad de los incisos –creo que el 21 pasaría a ser 22–, que diga “...los síndicos de las sociedades regularmente constituidas.”, sin aclarar la profesión de que se trate?

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: ya había anticipado que se iba a aceptar la sugerencia.

Los abogados estaban excluidos porque antes la obligación era muy genérica, y la obligación fundamental de los abogados es la defensa en juicio.

En ese sentido, no pueden ser obligados a ejercer la defensa en juicio y, al mismo tiempo, ser denunciadores de sus propios clientes. Eso afectaría el derecho a la defensa consagrado por la Constitución Nacional.

En este caso de la ley correctiva, donde se avanza puntualmente sobre las actividades, no hay ningún inconveniente para que todo profesional que sea síndico, no importa la profesión de que se trate, quede obligado en estos términos.

Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Queda resuelta su duda senador Verna?

Sr. Verna. – Sí, agradezco a los señores senadores y a la Presidencia.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: quiero referirme a dos cuestiones.

La primera tiene que ver con el beneplácito respecto de la uniformidad y vocación del cuerpo en el sentido de acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo y, a la vez, de enriquecerla con oportunos aportes en torno a generar lo que el senador Sanz llamaba el crecimiento institucional.

La segunda cuestión tiene que ver con tomar el guante del senador Sanz en torno a los desafíos.

Con la presente norma en consideración no solamente se crea una figura penal autónoma sino, fundamentalmente, se introduce algo de lo que es muy raro ser testigo: un nuevo título en el Código Penal.

La legislación penal de un pueblo –en nuestro caso, la codificación es de tradición romanista– es una de las construcciones más complejas y más valiosas culturalmente que una colectividad puede llevar adelante. En ella, en función de una escala de bienes jurídicos tutelados, se establece una descripción de conductas o tipos penales lesivos de esos bienes y se fija una prelación de sanciones, priorizando los valores más importantes de manera sucesiva en orden de importancia.

Por lo pronto, esto implica un cambio altamente positivo en lo que ha sido tradición en nuestra legislación penal de los últimos tiempos, ya que, sobre la base de convenios internacionales, incorporábamos leyes especiales que no precisamente tenían que ver con las estructuras teórica y jurídica de nuestro Código Penal. Basta recordar los principios liminares de la Parte General, en la que se definen los conceptos de autoría, participación, etcétera, los que luego no se repiten en cada tipo penal. En ese sentido, a veces hemos aprobado normas del derecho anglosajón contenidas en convenios internacionales que complicaban el funcionamiento de la Justicia.

Sin embargo, en este caso se tomó la razonable y criteriosa decisión de incorporar esta figura autónoma en un título especial que establece un nuevo bien jurídico tutelado por nuestro Código Penal: el orden económico y financiero. Es decir, el orden económico y financiero no agota las conductas lesivas del delito de lavado de dinero. En ese sentido, todos sabemos que el dominio dicta la doctrina, en cualquier orden: doctrinas militares, doctrinas de seguridad, etcétera. Es decir, quien ejerce el dominio dicta la doctrina, y en función de la doctrina surgen los manuales, los libros, los insumos, los profesionales, los armamentos, etcétera. Esto es lo que actualmente se denomina "las nuevas amenazas a la seguridad global", concepto que no fue objeto de cuestionamiento en la reunión de comisión realizada.

Simplemente, me limitaré a leer dos párrafos que no despertaron controversias. Uno de ellos fue expresado por el presidente de la Comisión de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce. El funcionario expresó lo siguiente: Otro flagelo de distinta dimensión que sufre nuestro país está conformado por las maniobras de lavado de dinero, pero no las que se realizan en nuestro país, sino las que se realizan en el extranjero con la fuga de capitales.

Continúa más adelante: Por condiciones estructurales, la Argentina no es un país apto para el lavado de dinero. Contamos con un mercado de capitales estrecho; cualquier movimiento de lavado de dinero involucra cientos de miles de millones de dólares. Este tipo de maniobras, en nuestro mercado de capitales sería imposible que pasaran desapercibidas por los órganos reguladores.

Posteriormente, creo que el jefe de la Unidad de Información Financiera da el dato –estaban presentes los representantes de la banca nacional y extranjera en el país– de que el nuestro, si no el principal, es uno de los primeros países por el volumen de divisa extranjera por habitante. Esto constituye una muestra clara de la desconfianza que generó en nuestra memoria colectiva y, en particular, en los bolsillos de nuestro pueblo, la conducta de nuestras entidades bancarias durante la crisis que no hace mucho tiempo vivió nuestro país.

Teniendo en cuenta la importancia de lo que hoy estamos considerando, no sólo en función de cumplir con las exigencias internacionales, sino fundamentalmente sobre la base de una construcción ética y jurídica, acompaño el planteo del ingeniero Verna en torno de la responsabilidad de todos los profesionales al respecto. No creo que deba haber privilegios de uno con respecto del otro. Siempre el nivel de conocimiento y el privilegio de la enseñanza es

lo que da mayores obligaciones. En consecuencia, como profesionales creo que tenemos mayores obligaciones.

Tengo la sensación de que en la única área de las actividades en la que no hay diferencia de naturaleza ni de conducta es en la economía. Hay fenómenos climáticos y atmosféricos de la naturaleza por un lado y conductas humanas por el otro. En la economía daría la impresión de que en función de doctrinas dominantes la naturaleza es la que la determina. El orden natural de las cosas genera la resolución de las cuestiones económicas.

La crisis reciente, a partir de la quiebra del sistema de hipotecas, obliga a aquellos mismos propugnadores de la absoluta desregulación del negocio financiero a exigir, ante el temor de ser ahorcados por sus propios pueblos, mayores controles.

Entonces, en el desarrollo de la naturaleza económica está marcado a fuego en el discurso dominante que las regulaciones son conspirativas contra el avance y el crecimiento económico.

Bienvenido este cambio de paradigma de que aquellos países que precisamente impulsaban esto que se plasmó en lo que fue el Consenso de Washington. Recuerden ustedes que Rockefeller alarmaba sobre los riesgos del exceso de la democracia, es decir, que existiera pero tutelada. Esto es como decir: actividad económica, regulaciones, pero no exagerar con las tutelas.

Entonces hoy este cuerpo se encuentra con la posibilidad de recibir el guante del desafío del senador Sanz y comenzar a legislar sobre aquellas conductas lesivas del sistema económico y financiero, que además implican –no nos confundamos– subjetividad de sujetos caracterizados por sus posibilidades. ¿O vamos a creer que es la misma capacidad de daño la de un director de un banco y la que tiene un simple trabajador?

Esto abre ese desafío sobre cuáles son esas conductas.

Hablamos del gran desafío del crimen organizado, de plutocracias enriquecidas y de oligarquías nuevas cuando estamos hablando del crecimiento de los delitos en los países del Este como consecuencia de la caída de un sistema político y la apropiación brutal de excedentes económicos que eran las propiedades colectivas. Es un proceso muy similar al de la Argentina en una década en la cual la transferencia de los activos del Estado a manos particulares generó volúmenes inimaginables, aun por los reyes de España cuando trasladaban los galeones con tesoros de América.

Ese crecimiento del crimen organizado detectado en función de los intereses concretos de los sectores de dominio imperial –y atendible totalmente– desconoce la otra criminalidad no tipificada, que es la financiera. A veces los diarios financieros parecen un parte de delitos diarios: maniobras contra las divisas, intentos de hacer quebrar los bancos centrales de los países endeudados, etcétera. ¿Dónde está la posibilidad de tipificar eso?

Por lo tanto, en función de los datos incontrovertibles de nuestra relatividad e importancia, es evidente que desde un país accesorio y secundario en el diseño internacional no vamos a lograr la sanción ni la modificación de los organismos internacionales que tienen que regular y controlar el crédito. Pero desde un concepto de región podemos comenzar a sumar esfuerzos comunes respecto de eso. Porque lo que está en juego no es solamente cuestiones de tráfico o de blanqueo, son cuestiones de estabilidad financiera. ¡Son cuestiones que, en una maniobra financiera, triplican la deuda de un país de un día para el otro! ¡Son maniobras que implican que los ahorristas pierden sus ahorros de un día para el otro!

Con todo respeto, quiero decir que el otro día, en la reunión de la Comisión, cuando estuvieron presentes los señores representantes de las bancas, si hubiéramos tenido una legislación que contemplara esta situación, muchos de ellos no podrían haber estado presentes porque estarían presos después de la crisis de 2001. Estas son las cosas que tenemos

que discutir hoy. ¿O nos olvidamos de cuando se abrían sucursales de bancos, pero resulta que no tenían nada que ver y nadie avisaba de eso? ¿Dónde está la responsabilidad, esa responsabilidad compartida del ente de contralor y del directivo, del propietario del banco?

Entonces, bienvenida el alza en la calidad de lo institucional, bienvenido el hecho de sumarnos a la demanda internacional acompañando esto. Pero también, desde nuestra relatividad, desde nuestra ubicación en los perjuicios que el ejercicio del poder financiero internacional nos ocasiona, tengamos el coraje de comenzar a dictar las normas necesarias para poner esa tarea y esa función al servicio de los intereses del pueblo y de la Patria.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente: de este proyecto, no me voy a referir a su articulado, porque ya lo han hecho muy bien la presidenta de la Comisión y los otros miembros informantes, sino sólo a algunos aspectos que consideraba insuficientes y que fueron volcados en un proyecto alternativo para vencer esta urgencia. Sin duda, deberíamos ser los legisladores los que estuviéramos corrigiéndolos en la propia ley, pero la llamada “urgencia del tratamiento” nos impide corregir los errores que vienen de la Cámara de Diputados.

Es verdad que hay un dictamen donde se contemplan un poco las inquietudes de los señores senadores, que también será aprobado. Tal vez, sea un paliativo. No tenemos ninguna certeza de que esto vaya a ser resuelto por Diputados; pero también es cierto que nos queda una salida. Son tan grandes las delegaciones que hacemos, que muchas de las cosas que estamos corrigiendo ya las arregló la UIF con resoluciones.

El 20 de mayo, en pleno tratamiento de este proyecto, la UIF emitió la Resolución 64 de este año que se adelanta a lo que estamos queriendo corregir aquí respecto de los contadores y les resuelve el problema. Con lo cual, queda en evidencia ante la sociedad que haber venido al Senado y expresado sus problemas aquí debe haber sido una pérdida de tiempo para ellos, porque haciendo lobby en la UIF lo arreglaron con una resolución. Ni siquiera tuvieron la prudencia de esperar que el Senado lo tratara, aunque sea el proyecto alternativo. Con esto se da a entender que la UIF irá resolviendo estos temas y que la Cámara de Diputados, tal vez, considerará abstracta esta cuestión que nosotros hemos contemplado o que vamos a contemplar, si aprobamos el proyecto alternativo.

Evidentemente, esto es un avance de la delegación sobre la facultad del Congreso, justo en momentos en que estamos tratando, por vía correctiva, de resolver esos errores. Eso en lo formal. Si bien no le quita validez a la norma ni la importancia que tiene, no son los procedimientos habituales para la sanción de una ley. Por lo tanto, a los “lobbistas” les digo que se queden tranquilos, porque la UIF puede arreglar todo lo que nosotros no podemos arreglar acá, tal como lo ha hecho con las resoluciones 64 y 65.

Aquí se ha hablado de terrorismo, de mafia internacional, de Al Capone, etcétera. Creo que esperar a que nosotros tomemos un pescado gordo de eso va a llevar tiempo. Tampoco podemos esperar el resultado de la UIF pasado mañana. Considero que la UIF no debe ser otra cosa que una base de datos en donde, prácticamente, figuremos los 40 millones de argentinos. El día que esté cruzada la base de datos sobre lo que hacemos los argentinos en materia de inversión, de financiamiento, de adquisición de bienes o transferencias con las declaraciones que estamos obligados a hacer ante la AFIP –lo que era la DGI antes–, ahí van a surgir las diferencias.

Creo que hacer una base de datos va a llevar un tiempo. Espero que exista la voluntad, el financiamiento y la eficiencia a efectos de que una base de datos de los argentinos sirva para muchas cosas; sirva para los créditos; para que aquel que comete un fraude –no, por ahí, de lavado sino un fraude comercial, de incumplimiento– también figure en esa base de datos; para que aquel que estafó con cheques en un banco no pueda abrir cuenta en otro y escaparse

cambiando el nombre de la sociedad. Se avanzó un poco en la limpieza de cuentas bancarias. Ahora sabemos también –porque se publica– que no siempre los bancos les cierran las cuentas con igual rigor a distintos emisores de cheques sin fondos o rechazados.

Así que, ¿en qué nos puede salvar esto de los extranjeros que cometen delitos y pueden venir a lavar aquí? En que, para que se cometa ese delito, va a hacer falta la concurrencia, la complicidad o la ayuda de algún local. Ahí es donde surge la importancia de haber ampliado las posibles puertas o los posibles puntos en los cuales la información se puede exteriorizar. A veces, es un poco exagerado, como en el caso que se va a resolver de las fábricas de automotores, porque igual está el registro, están los comerciantes. O sea, en la cadena hay otros que van a informar sobre las adquisiciones. Está la importación, los despachantes de Aduana, etcétera.

Pero en eso de cerrar puertas de escape para que no se puedan escapar quienes cometen esta infracción, voluntad de lavado o de blanqueo de dinero negro, lamentablemente, se han hecho excepciones. Una, que planteé en mi proyecto, es que no deberían estar exceptuados los abogados –en esto, escape de la defensa corporativa–, obviamente, salvo el caso del secreto profesional: cuando uno está defendiendo a un cliente, que no esté obligado a serle desleal. Ahora, si se asimila a la obligación de dar información en el caso de sindicaturas o de otras actividades que puedan tener los abogados, queda equiparada la misma obligación que se le ha dado a los contadores de que cuando auditen, cuando tengan que firmar balances, estén obligados a declarar operaciones sospechosas. En eso coincido con el señor senador por La Pampa: haber excluido a los abogados de arranque era una equivocación. Creo que se está corrigiendo eso.

También creo que ha sido un error excluir a los partidos políticos. Sabemos del riesgo en otros países, como Colombia y México, en los cuales se han hecho tantas denuncias de financiamiento de dinero negro o proveniente de delito para partidos políticos. Creo que no deberían estar excluidos los partidos políticos porque, si bien es cierto que hay, también, una obligación de informar, esto ha quedado un poco en el aire. En tal sentido, creo que hay un fallo que declara inconstitucional la última sanción que se hizo respecto de la obligación de la declaración de los ingresos de los partidos políticos. Desde varios años a esta parte, está un poco en la nebulosa la obligación de declarar o el rigor en la declaración que deben hacer los partidos políticos.

A mi entender, tampoco deben estar excluidos los sindicatos ni las obras sociales, salvo por el lado de los síndicos o los auditores en su momento. Creo que, si lo que queremos es que no haya ninguna puerta o vía de escape, haber dejado afuera a los partidos políticos, a los sindicatos y a las obras sociales es un error. Indirectamente se lo podría llegar a encuadrar, pero no a título de obligación directa. Aquí, si hemos sido tan detallistas en incluir tanto tipo de operaciones, no debería haber excepciones que sean una especie de puerta de escape.

Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Sanz le solicita una interrupción.

Sr. Romero. – Cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Le agradezco la interrupción.

Respecto del tema de los partidos políticos –no lo quiero dejar pasar para que no quede dudas–, considero que es razonable que no estén. De hecho, los que están son aquellos que tienen la obligación de informar porque por su actividad conocen o en su alrededor se efectúan operaciones susceptibles de ser informadas.

Si un partido político estuviera involucrado en alguna de estas cosas, lo estaría en su calidad de comprador o vendedor de un bien, transmitente o inversor, pero no por su

condición de partido político. Por lo tanto, me parece que está bien que esté fuera, y quería decirlo porque si no estaríamos dejando abierta la posibilidad de que se pensara que un partido político, además de sus tareas propias, es casi como una empresa que se dedica a otro tipo de operaciones.

Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Fuentes le solicita una interrupción.

Sr. Romero. – Cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Aprovechando la armonía en el debate, nobleza obliga: quiero aclarar que estuvo presente la señora presidenta de la comisión.

No fue una injerencia grosera la de la UIF sino un acuerdo con los senadores presentes de que, así como íbamos a aclarar en nuestros discursos el alcance ante el pedido de las colegiaciones de la norma, por vía de resoluciones administrativas iban ellos, también, a aclararlo. Eso quedó acordado.

Entonces, si no hay responsabilidad en el avance sobre otras facultades ha sido por nosotros y no, en este caso, por la UIF.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Este delito no surge solamente de operaciones de compra o venta de operaciones comerciales. Tenemos que prevenir la utilización –incluso, hasta en donaciones– de dinero que pueda provenir del delito.

No hay por qué pensar que un partido político no pueda ser víctima de estas circunstancias o que un candidato resulte financiado por dinero proveniente del delito. No voy a hablar de Al Capone ni de ninguno de esos grandes grupos del crimen organizado que existieron alguna vez. Me refiero al dinero negro de cualquier tipo: de contratista de obra pública, de beneficiados vía planes con dinero público, o de dinero privado no informado ante la declaración de ganancias.

Aquí estamos equiparando acertadamente tanto el dinero proveniente de delitos comunes como la nueva tipificación que tiene, también, la evasión fiscal, que es un delito. Antes, la evasión fiscal parecía una gracia en la Argentina y hoy es, también, un delito. De hecho, puede haber dinero proveniente de la evasión fiscal que financie a los partidos políticos. El que hace la cuenta del balance anual de un partido deberá estar obligado a informar los ingresos que ese partido tiene. El que audita ese balance –según los estatutos, los partidos tienen que hacer ese balance una vez al año– también debería estar obligado a informar.

No queda bien que los políticos exceptuemos a los políticos. No queda bien que los abogados exceptuemos a los abogados. Si estamos obligando a todos, la mejor forma de demostrar transparencia es no estableciendo excepciones. No digo que a mí me conste que esto ha sucedido o que sucede en la Argentina; al contrario. He presidido por casi 20 años un partido en mi provincia. No es que venga aquí desde la política a hablar mal de la política. Justamente, desde la política debemos mostrar que estamos en igualdad de condiciones para demostrar que nos hallamos también preocupados de que pueda, en el futuro, suceder lo ya que hemos visto en otros países.

Coincido en que las denuncias anónimas son peligrosas; pero puede pasar que un partido sea financiado con dinero proveniente del delito. Al margen, deberíamos estar precavidos y prevenidos de ese tipo de acusación, sea anónima o no. Con respecto a que la denuncia anónima no figure, en la Argentina, a veces, las condenas no vienen por los jueces sino por la prensa. Ya una persona acusada de lavar dinero está precondenada antes de que lo digan los jueces. Si a eso le sumamos la morosidad o demora en la Justicia, en el caso de ser inocente, el daño ya está hecho y no se puede reparar. Al contrario, se extiende tanto en el

tiempo, que el perjuicio ya está logrado. Además, si alguien necesita protección para denunciar, la ley prevé que el juez puede proteger a un testigo o a un denunciante.

– *Ocupa la Presidencia el vicepresidente del H. Senado de la Nación, senador Juan Carlos Marino.*

Sr. Romero. – Por lo tanto, en el caso de alguien que, por alguna razón, esté dispuesto a hacerlo pero no quiera que se exteriorice, el juez está facultado para actuar al efecto.

No quiero establecer sospecha, al contrario, ni nada parecido respecto de los partidos políticos, las obras sociales o los sindicatos, sino que deberíamos tratar de que no hubiera ninguna puerta de escape para que el dinero proveniente de delitos de cualquier tipo, incluida la evasión fiscal, pueda hallar caminos a efectos de sortear los efectos de esta ley. En este sentido, ya me referí a que la delegación ha significado, obviamente, que la UIF pueda corregir muchas cosas. No obstante, voy a votar afirmativamente en general este proyecto. En particular, votaré en forma negativa algunos artículos. En cuanto a la ley correctiva, obviamente, apoyo el esfuerzo y el trabajo que han hecho los señores senadores.

Por último, queda desear que exista la misma celeridad para todos los tratamientos. El hecho de que sobre tres mil denuncias solamente se hayan enviado a la Justicia ochocientas y no haya habido más que un fallo en contra de poca importancia nos hace pensar que hay más herramientas para corregir la situación.

Tampoco creo que la UIF sea una parte de una política de Estado. Es una política de Estado pertenecer a los países que respetan el Estado de derecho. Considero que la viveza criolla no debe ser una forma de vida para todos, sobre todo, en la Argentina, donde hemos tenido conductas muy errantes; incluida la que señaló el senador Fuentes, referida a que la fuga de dinero de los argentinos hacia afuera no sólo fue por los bancos que no cumplieron. También, algo de culpa tenemos los políticos que, a veces, hemos sancionado leyes contradictorias o fuimos apremiados por urgencias, provocando más problemas que soluciones. O sea, la conducta colectiva del país en muchos años ha generado esa falta de confianza y, lamentablemente, la credibilidad es muy difícil de volver a recrear de un día para el otro. Pero eso no se riñe con la necesidad de que haya normas que sean utilizadas para perseguir esos delitos.

Espero que ese organismo se profesionalice; que jamás sea usado para cajonear los expedientes de los amigos y jamás sea usado para acelerar los expedientes de aquellos que no lo son. Las normas no pueden evitar su propio mal uso; pero nosotros, los argentinos, sí deberíamos comprometernos a que las buenas prácticas deben ser una cuestión de Estado. La UIF no tiene que ver con las políticas coyunturales sino con políticas de Estado y de lucha contra el delito. Entonces, no importa cuál sea el gobierno porque no es el gobierno el que deba dictar la norma, la premura, la eficacia o eficiencia a la UIF. Lo que vale es el cumplimiento de la ley y la no comisión de algún delito.

De modo que espero que el organismo tenga la suficiente autonomía para que no sea influido por las políticas de gobierno sino solamente por las políticas de Estado. Me refiero a las decisiones de las Cámaras del Congreso y a las decisiones del gobierno. El objetivo debe ser que la conducta de los argentinos sea observada como la de los ciudadanos de un país serio.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo que a esta altura del debate, se han mencionado reiteradamente las condiciones en que estamos tratando esta iniciativa en cuanto a la urgencia que tenemos. Pero esto no nos impide –a mi juicio– remarcar que, en el escenario en el que tenemos que discutir esta ley, hay una mayúscula responsabilidad del gobierno nacional. Esta responsabilidad fue admitida por el propio ministro de Justicia cuando, en ocasión de su

presencia en la comisión, como motivo fundamental para la sanción de esta norma, nos habló de las urgencias que tenía el país por las exigencias del GAFI. Esto torna bastante inadmisibles el tratamiento de la ley.

Gobierna el mismo partido desde hace muchos años en la Argentina y, hasta acá, no avanzamos en este tema. Es más, con anterioridad a la discusión de este proyecto de ley, sancionamos una norma sobre blanqueo de capitales; y en la comisión, los funcionarios del Poder Ejecutivo trataron de hacernos ver que el gobierno había hecho avances importantes en este sentido. Creo que ha habido bastante desidia. Casualmente hoy, en un matutino, se habla precisamente de la desidia del gobierno en el tratamiento de esta cuestión.

Este proyecto de ley tiene una importancia que supera la urgencia con la que hoy nos vemos obligados a considerarlo. Hoy, simplemente, estamos siendo complacientes con el GAFI y no advertimos –creo– que estamos diagramando nuestro sistema jurídico y nuestro orden administrativo para adecuarlo a un mecanismo de control frente a delitos muy graves, complejos, aberrantes, que se cometen en todo el mundo y no tienen fronteras.

Seguidamente vamos a analizar este apuro, motivado por esta inacción de no abordar el tema oportunamente, lo que nos lleva a sancionar una norma que no es precisamente la apropiada para estas situaciones. ¿Por qué? Porque este proyecto, simplemente, ha sido concebido en una carrera por una posible sanción al país por parte del GAFI.

Las modificaciones –lo dijo muy bien el senador Sanz–, en realidad, debieron ser diseñadas en forma prudente, de manera que se correspondieran con nuestra realidad socioeconómica. Honestamente, yo creo que ni la UIF ni los sujetos obligados estén preparados para cumplir con las nuevas regulaciones.

Esta norma contiene deficiencias que han llevado al presidente del propio bloque oficialista a pedir a los senadores en la comisión que, cuando expusiéramos los alcances de la iniciativa en este recinto, fuéramos muy claros para que no quedaran dudas a quienes tendrán que interpretarla. Esto marca una falencia. Es más, hoy estamos sancionando una ley correctiva. Es indubitable y evidente el hecho de que, como técnica legislativa, la que estamos utilizando no es, precisamente, la más aconsejable.

El proyecto incluye normas dirigidas a contemplar el delito de lavado de activos. Aquí se ha hablado mucho de que, con estas modificaciones, estamos estableciendo un tipo penal autónomo. En segundo lugar, estamos legislando normas y adecuando el funcionamiento de la UIF. Pero además de estas dos cosas que estamos haciendo, también es necesario que el Poder Ejecutivo comience a implementar y a coordinar acciones para combatir los delitos que generan el dinero y los bienes que, luego, se lavan en el mercado. Generan el dinero y los bienes que luego se lavan en el mercado. Esto marca y confirma, una vez más, que este proyecto, tratado aisladamente de la necesidad que tenemos de abordar las otras cuestiones, significa una relación espasmódica ante una urgencia de un organismo internacional.

La ley 25.246, por la que se creaba la UIF –la Unidad de Información Financiera– permitía ya la persecución penal del lavado de dinero proveniente de cualquier actividad ilegal, pero exigía que a la persona que violara la normativa se le debía probar, antes, el delito respectivo –el tráfico, el narcotráfico, etcétera– en el cual hubiera participado. Aquí se explicaron muy bien las dificultades que esto ocasionaba, dado que el encubrimiento en este caso estaba atado al juzgamiento y a la comprobación del delito que lo precedía y, por otro lado, a no ser tampoco ser considerado como un delito autónomo, dado que cuando una persona lavaba su propio dinero obtenido de manera ilegal sólo se la podía juzgar también por la maniobra de origen y no por la maniobra secundaria ya que quien lava su propio dinero tampoco se puede encubrir.

Ahora se dice que hemos avanzado en categorizar al delito como autónomo.

Personalmente, tengo mis dudas al respecto tal como ha quedado redactado el artículo 303 del Código Penal. Ese artículo dice que será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal. Lo que sí se ha suprimido es la frase que establece “en el que no hubiere participado”. Realmente, creo que estamos creando una autonomía muy *sui generis*, dado que pensamos que por el solo hecho de suprimir esa frase le damos autonomía al delito.

La presidenta de la comisión ha señalado muy bien que el proyecto modifica otros artículos del Código Penal, estableciendo responsabilidades para las personas jurídicas. La técnica legislativa que ha sido utilizada para establecer las responsabilidades de las personas jurídicas es el reacomodamiento gramatical de la sanción administrativa prevista en la ley 25.246. No hemos inventado absolutamente nada nuevo.

Si bien la redacción del artículo 305, sobre las medidas que el juez puede adoptar, responde a una de las recomendaciones del GAFI también nos causa alguna preocupación, dado que el decomiso y la revisión de bienes sin resoluciones judiciales que tengan por firme la comisión de un delito ameritan que analicemos esta cuestión con mucha prudencia.

En lo que respecta a las modificaciones realizadas en el cuadro de la Unidad de Información Financiera, creo que este proyecto no viene a mejorar absolutamente nada respecto a la legislación que ya tenemos.

La redacción actual y la del artículo 6° del proyecto, cuando refiere a las competencias de la UIF, son exactamente las mismas; o sea, el análisis, tratamiento y transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, mencionando una serie de delitos que son de especial importancia.

La redacción es clara y tiene simplemente un carácter enunciativo. Pero, en realidad, la inclusión en la lista del artículo sustituido de tres nuevos incisos no delimita ni amplía absolutamente nada. Originariamente había merecido acá una especial atención el inciso j) de la norma, que ahora va a ser tratado en la ley correctiva. No me queda claro –probablemente se preste a confusión, y algo ya se dijo acá recién– el tema de las atribuciones de la AFIP y de la UIF. La AFIP tiene la obligación de denunciar la evasión y de dar información a la UIF sobre las operaciones sospechosas. Cuando se trata de operaciones sospechosas, además la AFIP tiene la obligación de denunciarlas al Ministerio Fiscal. Convengamos que la AFIP dispone de mayor capacidad operativa para hacer estas determinaciones, para detectar este tipo de operaciones. Ahora bien, lo que no se entiende es cuál es la necesidad de ser ahora la AFIP sujeto obligado de dar información a la UIF, siendo que tiene también por ley la obligación de denunciar este tipo de operaciones.

También es sabido que ante la denuncia de evasión, el Ministerio Público siempre investiga si no hay detrás operaciones de lavado.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Marino). – Señor senador, la presidenta de la comisión le solicita una interrupción.

Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: con relación al tema que acaba de abordar el señor senador preopinante, quiero explicar específicamente en qué se está cambiando la cuestión del secreto fiscal.

En la legislación actual la AFIP solamente da información de operaciones que reporta

la propia AFIP, pero cuando la UIF le pide a la AFIP información de otros contribuyentes – porque está viendo reportes de otra entidad– la AFIP hoy le opone el secreto fiscal y le dice “vaya a un juez para que el juez allane ese secreto fiscal”. Ese es el gran cambio que se hace en este momento. De ahora en adelante, la AFIP no podrá oponer secreto fiscal de ningún contribuyente.

Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: de todas maneras, no es un tema menor, por lo que debería quedar bien planteada cómo es la interacción entre la AFIP y la UIF. Al respecto, yo tengo mis dudas sobre el texto que se va a sancionar.

En la ley se trata de incluir todas las categorías que nos piden los organismos internacionales. Seguramente, el celo por perseguir delitos como el narcotráfico es bien recibido por toda la sociedad. Pero volvemos a lo que decíamos recién: ese empeño no debe estar sólo en la UIF sino también en todos los organismos policiales, ejecutivos y judiciales del país.

¿De qué nos sirve legislar en este sentido si tenemos todavía el país sin radarizar? Todos sabemos que estamos hablando del blanqueo de bienes que proviene de ese tipo de ilícitos.

El temor que surge, tal como ha quedado redactado el proyecto de ley, es que la UIF pueda recibir tantos reportes ajenos a su propósito central que termine ocupando sus recursos en descubrir posibles evasores, tarea que –repito– corresponde a la AFIP.

Quiero detenerme en el tema de la designación de las autoridades de la UIF y su funcionamiento. El senador Sanz ya se refirió a ello en su exposición. Los reparos que tenemos ya se han explicado claramente: hay una discrecionalidad absoluta por parte del Poder Ejecutivo en la designación y remoción de sus miembros.

El senador Pichetto ha señalado que esto debe responder a políticas de gobierno y no a políticas de Estado. Evidentemente, este asunto nos ahonda en un debate más profundo, que no es el objeto de la discusión de hoy, y es en cómo concebimos el poder. Claramente concebimos el poder de manera distinta para hacer este tipo de distinciones entre políticas de gobierno y políticas de Estado. Hay quienes piensan en cómo administrar el poder y hay otros que entienden que uno se puede apropiarse del poder y usarlo a su antojo.

El senador Fuentes decía que nos asustaba la exageración de las tutelas. Precisamente, cuando se habla de la necesidad de tutelas se esconde la idea de que no haya control. ¿Qué control puede haber cuando quien me controla depende de mi voluntad? Absolutamente ninguno. Esto es lo que va a pasar, tal como está constituida la UIF y cómo está funcionando.

Además, cabe mencionar otro aspecto de esta cuestión. Considero que muchos de los que van a integrar la UIF no van a tener capacidad para investigar los delitos que generan el dinero que luego se tiene que lavar. Convengamos que son delitos complejos y si queremos jerarquizar las normas y ponernos a la par de otros países pongámonos también –como hacen otros países– a capacitar a quienes tienen que estar controlando operaciones como las de lavado de dinero.

Es decir, cuando observo cómo queda conformada la composición de la UIF no veo que las personas que allí se designen realmente tengan conocimientos específicos sobre los temas que tienen que investigar.

– Ocupa la Presidencia el señor senador por Salta, doctor Juan C. Romero.

Sr. Cimadevilla. – Y también creo que hay una falencia conceptual en la ley, cual es la de sancionar a las personas que tengan que informar sin que esté previsto de qué manera las tenemos que capacitar. Porque no se trata solamente de sancionar a las personas que deben

informar sino que, por la naturaleza de los temas que tratamos, también es necesario que las capacitemos para que nos ayuden a descubrir las operaciones de lavado, y eso también está ausente.

Por las cosas que aquí se han dicho permítaseme también dudar de cómo puede ser utilizado el poder que va a quedar en manos de la UIF. Casualmente, ya hay apariciones periodísticas –como mencionó la senadora Bortolozzi de Bogado– de un caso concreto en relación al comportamiento de este organismo con el Banco Macro. Ese caso fue muy bien relatado a través de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon, publicado en el diario La Nación del domingo 22, donde se describen muy bien las intenciones que tuvo este organismo, la discriminación que hace con determinadas entidades bancarias y cómo las operaciones de la UIF favorecieron una operación de transferencia de un banco en favor de amigos del poder. Esto sí nos preocupa; y nos preocupa porque este no es un hecho aislado sino porque es un hecho que pone en evidencia una vez más cómo el kirchnerismo ejerce el poder el, algo que no se ve reflejado sólo en la UIF.

Podríamos discutir sobre muchos temas. Si aquí hoy discutiéramos sobre la necesidad que tenemos en el país de contar con una Secretaría de Comercio que controle la política de precios, las políticas de agio o de especulación todos coincidiríamos –y a lo mejor hasta coincidiríamos en la redacción de la norma–, pero luego el kirchnerismo designa a Moreno y en el ejercicio concreto de las acciones de poder muchas veces malversa las finalidades y los objetivos que hemos tenido en cuenta al momento de sanción de las leyes.

Por eso, señor presidente, tal como queda la ley y de la manera en la que el gobierno ejerce el poder a mí me quedan muchas preocupaciones.

El doctor Marteau fue muy claro en la comisión, y también lo mencionó el senador Sanz aquí. Textualmente dijo que la lucha contra el lavado de dinero de ninguna manera sirve para el control de las circulaciones de bienes de capital ni para servir de soporte a la recaudación tributaria. Y dijo que la prevención del lavado de dinero está destinada desde sus orígenes –en la década del ‘90– a combatir el crimen organizado.

Yo pregunto si las personas que vamos a dejar a cargo de la UIF conocen algo sobre el crimen organizado. ¿Estamos creando una ley que va a permitir designar personas que conocen algo de los temas que vamos a investigar? Yo no sé si es esta la conformación más adecuada de un organismo de esta naturaleza.

Se dice que se ha jerarquizado a la UIF y se hace mención al presupuesto que va a tener, pero en verdad esto no tiene nada que ver con la realidad. Porque probablemente, según como quede redactada la ley, de nada servirá darle más presupuesto y más importancia mediática a su jerarquización si antes no capacitamos a sus integrantes –como se dijo. Porque probablemente la UIF termine actuando más, como organismo, cuidando las evasiones fiscales que investigando otros delitos.

En cuanto a la designación del oficial de cumplimiento por las personas jurídicas, en mi opinión no es una mala modificación ya que, por lo menos, se aclara quiénes deben serlo y cuáles son sus responsabilidades.

Por estas razones, señor presidente, más allá de que como se dice en el campo estamos legislando con el cuchillo en la panza, lo que estamos haciendo es cumplir con una obligación de un organismo internacional y, realmente, nos hemos privado de tener un debate que nos permita arribar a una herramienta legislativa que sirva a los objetivos que hoy estamos declamando.

Por estas consideraciones, dejo sentado que vamos a acompañar la sanción de esta iniciativa únicamente por la urgencia que afronta el país para evitar sanciones de organismos internacionales. En tal sentido, quiero recalcar todos los reparos y dudas que nos genera el

articulado tal como ha quedado redactado.

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la senadora Escudero, presidenta de la comisión, por el trabajo serio y en profundidad que se ha realizado respecto de la norma en consideración que nos ha permitido conocer las distintas posturas, tanto del gobierno nacional como de la UIF.

En efecto, la UIF dio explicaciones sobre ciertas ausencias ante requerimientos concretos de la comisión y, a la vez, se tuvo la posibilidad de escuchar a los sectores privados que, según la redacción de la norma sancionada por la Cámara de Diputados, afrontaban dobles imposiciones de multas o casos donde un simple empleado de una institución debía enfrentarse a apercibimientos de multas, sanciones penales, etcétera.

En las distintas reuniones realizadas se pudo escuchar, opinar, debatir y aclarar estas cuestiones de manera de avanzar en este proyecto correctivo, como bien lo ha explicado la señora senadora Escudero.

Si bien reitero mis felicitaciones a la señora presidenta, quiero explicar que nuestro bloque ha presentado un proyecto en minoría en el que se contemplan los aspectos importantes que debían resaltarse y que, si hubiera sesionado hoy la Cámara de Diputados, tal vez se podrían haber aprobado para dar una sanción definitiva a un marco legal más adecuado.

Es indudable que la Argentina debe sancionar una buena ley de lucha contra el lavado de dinero.

En este sentido, la actividad del lavado de dinero impacta en distintos sectores de la sociedad, todos con un grado alto de importancia. Por ejemplo, el impacto económico de las operaciones de lavado de dinero, según las estimaciones de los especialistas que investigan el tema, se estima en el orden del 2 al 5 por ciento del producto bruto interno mundial, una cifra de aproximadamente 2 billones de dólares que se manejan por rutas clandestinas de lavado de dinero. Pero esto no es todo. También existen otras implicancias y distorsiones económicas en el sistema. Me refiero a que esta clase de operaciones, cuyo único interés es ocultar el origen ilícito de los fondos que ingresan, no tiene ningún interés por el destino de las inversiones. Muchas veces, se hacen inversiones en actividades ineficientes donde el costo de oportunidad lo único que hace es obstaculizar el crecimiento económico de un país.

Pero también estos fondos provenientes de actividades ilícitas o de paraísos fiscales –algunos los llaman fondos buitres, y otros les dan otras conceptualizaciones– provocan grandes espasmos –tal como manifestó el senador Cima Devilla– o impactos en las economías y en las instituciones financieras. Porque esos fondos son depositados en instituciones financieras; salen al mercado; se retiran intempestivamente y producen lo que denominamos "corridas bancarias" y el descalce entre las operaciones activas y pasivas. Por lo tanto, se trata de fondos que se mueven en el mercado financiero, por supuesto, sin ningún tipo de escrúpulos, y que provocan las tan conocidas corridas y crisis financieras en el mundo.

A pesar de que un senador dijo que no era un aspecto importante –yo creo que sí lo es–, el lavado de dinero también dificulta la recaudación de impuestos. Entonces, si dificulta la recaudación de impuestos, atenta contra una ordenada asignación de los recursos públicos y, por consiguiente, con el progreso de un país. ¿Por qué? Porque el dinero ilícito circula por fuentes subterráneas, sin una legislación adecuada se hace muy difícil detectarlo y, en consecuencia, compite con el contribuyente honesto y con la empresa que se preocupa por pagar sus impuestos y tiene responsabilidad social, etcétera.

Finalmente, el lavado de dinero facilita la corrupción; traslada lo que tendría que estar en el mercado formal al mercado informal; corrompe el sistema económico; corrompe los

sistemas políticos, y trae aparejado los delitos de narcotráfico y de narcolavado, es decir, lo que leemos que sucede todos los días en muchos países de Latinoamérica.

El Banco Interamericano de Desarrollo, en el último informe que emitió –aunque cuando lo cité el jefe de Gabinete de Ministros lo trato de "destruir"–, expresa que, en realidad, la Argentina es el país con mayor nivel de lavado de dinero en América latina. Esto es sumamente preocupante. Por ello, ¿cómo no vamos a querer una buena ley contra el lavado de dinero, si ese delito se relaciona con el terrorismo, con el crimen transnacional organizado y con el tráfico internacional de drogas?

Tan importante ha sido la apatía –o quizá la inercia– que hemos tenido para combatir y controlar este tipo de delito en la República Argentina, que en veinte años de vigencia de la primera ley en la materia sólo dos casos tuvieron sentencia judicial: "Caserta" y "Altamira Vallejo". Reitero: en veinte años de vigencia de la ley sólo hubo dos sentencias judiciales. Este dato es por demás demostrativo de que en la República Argentina no ha existido ningún tipo de control de este tráfico de dinero.

Además, no quiero dejar de expresar lo que manifesté oportunamente en la comisión. Este Congreso sancionó la ley de repatriación de capitales –o ley del perdón, como se la denominaba vulgarmente–, mediante la cual expresamente se liberaba de la obligación de mencionar cuáles eran los orígenes de los fondos que se traían desde el exterior o que se sacaban del colchón en ese período. O sea que en realidad abrimos una gran puerta para que el dinero proveniente de este tipo de operaciones entrara y se invirtiera en la República Argentina sin ningún tipo de control.

Quiero resaltar dos o tres cuestiones acerca del dictamen en minoría. Comparto lo que dijo el senador Romero en cuanto al tema de los partidos políticos. Integramos los partidos políticos, pero no porque estos hagan negocios, como lo expresó el senador Sanz, sino, como dijo el senador por Salta, porque reciben donaciones y financiación para campañas políticas. Entonces es lógico que estén dentro de los sujetos obligados. También incorporamos en ese dictamen los sindicatos, las obras sociales, las fundaciones y las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Señor presidente: el primer párrafo de la resolución 1373 del año 2001 expresa que las organizaciones de beneficencia o sin fines de lucro pueden ser utilizadas por agrupaciones terroristas, entre otras, para recaudar y transferir fondos. Y dice que en la regulación debemos tener presente el papel importante que tienen los organismos de la sociedad civil en la vida política de los Estados y, por ello, la regulación debe poner restricciones, medidas y controles dentro del marco de la seguridad jurídica.

Así que con esto y atento a lo que ya se ha expresado acá, donde hoy públicamente se está cuestionando el destino de fondos públicos, del dinero de los argentinos sin rendición de cuentas o de fundaciones que han servido, a lo mejor, como un escaparate para determinadas situaciones, con mayor razón debemos incorporar estos sujetos obligados.

En cuanto a lo que decía el senador Cimadevilla, en su momento planteamos en la comisión que no nos parecía correcto que ingresaran fondos a la UIF –persigo, decomiso, vendo, cobro las multas–, por lo que en nuestro dictamen en minoría habíamos propuesto aplicarlos a una necesidad imperiosa que creemos que hoy tiene la República Argentina, que es la habitacional. En tal sentido creemos que el FONAVI les va a dar una utilización más correcta.

Usted sabe, presidente, que el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre nuestro país indica que el 25 por ciento de los hogares argentinos presenta un déficit habitacional, pero el 35 por ciento vive en condiciones de hacinamiento. Entonces hacemos la siguiente reflexión. Hoy el FONAVI tiene un presupuesto de 2.000 millones de pesos

aproximadamente. Si tenemos el 35 por ciento de las familias argentinas en estado de hacinamiento, ¿por qué no destinar el dinero que proviene de todos estos recursos que a través de estas sanciones va a recaudar la UIF, a resolver uno de los problemas acuciantes que tiene hoy la República Argentina, que es el problema habitacional?

También en el dictamen en minoría incorporamos los requerimientos de quienes escuchamos en las audiencias organizadas por la Comisión de Justicia, algunos de los cuales han sido solucionados en la ley correctiva: lo relativo a la doble imposición, a los montos altos y a la sanción a la persona jurídica, en el sentido de que a través de la sanción a los administradores se sancionaba al empleado, al sujeto obligado.

Por otro lado, en un momento en que las comunicaciones son electrónicas y las operaciones las hacemos por Internet, se obligaba a las operaciones de seguros. Como aquí bien se explicitó, estas operaciones a veces son por 32 pesos mensuales, en su mayoría relacionadas con seguros de vida. No obstante, se obligaba al asegurador a que le fuera mostrado el Documento Nacional de Identidad original cuando, por ejemplo, hoy se compran acciones por Internet —yo no compro ni vendo—, o compramos autos o hasta inmuebles en el mercado de venta libre. Sin embargo, le exigíamos a las entidades aseguradoras que pudieran comprobar el DNI o a cada persona jurídica el estatuto inscripto, etcétera. O sea una verdadera contradicción.

Bueno, todo esto ha sido superado por el proyecto correctivo que ha presentado la Comisión. Simplemente, hemos dejado nuestro dictamen en minoría, donde está volcado el trabajo que realizamos y cuáles eran nuestras posturas respecto de este proyecto de ley. Por eso, en cuanto a la sanción de la Cámara de Diputados acompañaremos en general y nos vamos a abstener en particular; y apoyaremos el proyecto correctivo.

Por último, presidente, oportunamente solicitaré permiso para insertar mis fundamentos.

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Cano. – Señor presidente: no voy a redundar en conceptos que acá se han vertido. En ese sentido, tanto desde el bloque del oficialismo como desde la oposición, en términos generales, nadie puede dudar —con una mirada positiva hacia el futuro— que la sanción de esta norma indica un paso adelante en el combate efectivo del delito del lavado y del autolavado de dinero.

Son obvias las deficiencias de nuestro país en torno al combate del lavado de dinero. Habrá que ver si la aceleración en el avance de este proyecto de ley realmente tiene que ver con una mirada distinta o diferente del gobierno nacional a partir de su sanción o si simplemente, como se manifestó en la Cámara de Diputados en diversas partes del debate, esto corresponde más que nada a salvar a la Argentina de las sanciones que podría recibir por no contar con una norma de estas características.

En verdad, nosotros tenemos una obligación. Nadie pretende que el país tenga sanciones. La amenaza de recibir estas sanciones se vincula con los incumplimientos serios y reiterados por parte del gobierno nacional, relevados por el GAFI desde 2003.

Pero las convicciones y los principios por los cuales tenemos que avanzar en la sanción de esta norma se asientan en la lucha contra el lavado de dinero para no permitir que siga avanzando en la Argentina el crimen organizado. Nuestro país se convirtió en uno de los países de mayor consumo de cocaína y de marihuana en América del Sur; incluso se detectaron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires laboratorios de cocaína. Se debe resolver el flagelo de la droga y la falta de radarización sobre la que aquí se hizo referencia.

Tampoco existe —o existía— información fehaciente sobre un delito como la trata de personas; y es casi nulo el avance contra la corrección.

– *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la Nación, senador Juan Carlos Marino.*

Sr. Cano. – Pero hay una primera pregunta que deberíamos hacernos. Y esto no implica hacer un juicio de valor hacia al oficialismo, hacia quienes hoy les toca conducir los destinos del país, sino tener una mirada de autocrítica de toda la dirigencia política. Obviamente, al oficialismo le corresponde una parte importante desde el 2003 a la fecha. La pregunta es si con la sanción de este proyecto de ley vamos, efectivamente, a combatir este delito.

¿En la Argentina hay presos producto del lavado de dinero? ¿O no hay lavado de dinero en nuestro país? Me parece que se define un bien jurídico tutelado nuevo, con un nuevo título en el Código Penal. Se pueden decomisar fondos, aun antes de tener la condena judicial, y esto me parece que implica un paso adelante. Y también es importante, cuando se habla de las sanciones, saber a qué tipo de sanciones está sujeto el país.

Por un lado, todos los países que no cumplen la normativa de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo integran listas, y hay medidas de control estricto con esos países, lo que encarece moverse en el sistema financiero para esos países y, obviamente, a un país exportador como el nuestro, esto lo puede afectar. Si el país no demuestra que cumple con el compromiso asumido se puede llegar hasta la expulsión del GAFI, y esto podría tener consecuencias para la permanencia estratégica de la Argentina en el G-20.

Es decir, señor presidente, que nadie duda de que, desde la convicción o desde la necesidad, y teniendo una mirada tal vez un poco más optimista que la del senador Cimadevilla, si bien es cierto, coincido con varios de los planteos que él ha hecho, esperemos que esto efectivamente se haga desde la convicción, y avancemos y transitemos un camino distinto.

Pero quiero hacer, sobre la base de lo que planteaba el senador Sanz, algunas reflexiones sobre lo que está pasando hoy. Acá se hizo referencia a la situación de Jorge Brito, un banquero que, obviamente, creció con este gobierno, que administra fondos en muchas provincias, que llegó de la mano del gobierno nacional. Pero a partir del exhorto que se realizó desde otro país, vinculado con Hugo Moyano y su familia, esto tuvo una derivación. La Justicia investiga al sindicato de Camioneros y a su obra social. Ambas instituciones, que hoy están vinculadas con la familia Moyano, aparecen en reportes de operaciones sospechosas que elabora la UIF.

Cada vez que se detecta un movimiento de dinero incierto, los listados sobre este hecho en particular fueron solicitados por un juez, y están vinculados al aporte de la campaña electoral en 2007. Según fuentes judiciales que uno pudo chequear, se hizo un requerimiento a la UIF; y de la UIF contestaron que no existen reportes de la obra social del camionero. Y la verdad es que sí existen. Uno de los expedientes, el 359/2009, que se inició por un depósito en un banco privado, de una mujer de apellido Salvi, vinculada a la empresa de salud proveedora de Camioneros, los fondos llegaron a la obra social de Moyano y terminaron administrados por la mutual que maneja su hijo, Pablo Moyano.

Esto tiene que ver con que esta sospecha y desconfianza que se generan en la justicia federal, cuando la UIF informa, el 5 de abril pasado, al Juzgado Federal número 4 diciendo que, habiendo realizado las consultas de las bases de datos obrantes en esta Unidad, no se han encontrado registros de reportes de operaciones sospechosas ni de investigaciones por el lavado de activos con relación a Hugo Moyano, Pablo Moyano, Luis María Corsiglia, la Cooperativa de Viviendas de Lanús, el Sindicato de Camioneros y la Obra Social de Camioneros.

Se trata de lo nombrado en el exhorto, que tiene que ver con el requerimiento que realizó Suiza. Pero en el Juzgado número 4 consta un informe anterior a la actual gestión de

la UIF, remitido por la Justicia y que tiene como número el 11.912/2008, que investiga si existió lavado de dinero en los aportes de la campaña de 2007; y con otro expediente, el 359/2009, que llegaron por vía extraoficial al juzgado. Sin embargo, cuando se pide a la UIF que requiera estos informes, se contesta que no existía en la UIF expedientes o informes sobre lo que pedía el juzgado, aunque extraoficialmente ya los tenía.

Entonces, lo que se plantea acá es que la actual conducción, o el actual director –que está acá presente y me merece el mayor de los respetos– no es una persona que llega desde un perfil técnico, sino que viene desde la política, lo cual, para mí, no implica absolutamente ningún juicio de valor, porque yo reivindico la política.

Ahora, la verdad es que cuando dejó el gobierno nacional, cuando estaba a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actuó como economista del Centro de Estudios Económicos Sindicales de Hugo Moyano. Evidentemente, para el gobierno nacional, sigue siendo un muy buen antecedente tener vinculaciones con Moyano para ocupar cargos estratégicos en el Poder Ejecutivo. Esto sin hacer juicio de valor, sin prejuizar, simplemente son datos, circunstancias que han ocurrido.

Y con referencia a lo que decía el senador Sanz, me parece bien que avancemos en la sanción de la norma, pero también creo que al frente de organismos estratégicos tiene que haber personas que tengan probada independencia de criterio, que no significa no tener pertenencia a uno u otro sector político.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo al tratamiento del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados como al proyecto de ley correctivo planteado por este Senado.

Estamos ante un tema fundamental, como es el lavado, que constituye un delito de alcance trasnacional que amenaza la seguridad local, regional y global. Comparto plenamente que un delito de esta naturaleza se lo tipifique como delito autónomo y que no solamente lo hagamos en estas circunstancias para cumplir con un requerimiento internacional, sino que también lo hagamos como una decisión política del Congreso de la Nación de avanzar en el combate de un tema que es fundamental en la República Argentina, en la región y en el mundo.

El tráfico de drogas, de armas y de personas son delitos deleznablemente rentables. Hoy, en tiempos de la globalización, generan mucho dinero que en algún momento se tiene que ingresar en el circuito legal, real de la economía y de las finanzas. Por eso el tema del lavado es clave y está planteado como un delito complejo.

Me parece importante señalar que, como se dijo en muchas exposiciones, no es una cuestión técnica, del plexo normativo jurídico argentino, la que estemos abordando hoy, sino que es una cuestión que aborda a la cotidianidad de los argentinos. ¿Qué tiene que ver el kiosquito de venta de drogas en una ciudad como la mía, en Rosario? ¿Qué tiene que ver ese mismo kiosquito que está en tantas ciudades del país como Buenos Aires o en Córdoba?

– *Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José J. B. Pampuro.*

Sr. Giustiniani. – Vemos que esto aumenta y que la respuesta que estamos dando desde el Estado va a una velocidad infinitamente menor a la requerida para el combate del narcotráfico. Por eso este proyecto de ley de tipificación de delito es importante, porque significa avanzar en una dinámica de control, que es un rol del Estado.

En ese sentido, cuando dimos un paso adelante con la sanción de la Ley 25.871, de Política Migratoria Argentina, lo hicimos no solamente desde la perspectiva de darle derechos a los migrantes, sino desde la perspectiva de castigar el tráfico de personas. Nos

preguntamos tantas veces por qué no está tipificado el tráfico de personas. Lo mismo sucedió en el debate importante que realizó este Senado respecto del tratamiento de la trata de personas. También fue un avance cuando en el año 2000 sancionamos la ley que castigó el tráfico de drogas y que significó un avance en todo lo que era el delito de lavado de dinero.

Dijimos el 18 de diciembre de 2008 que el Título III de la ley 26.476 daba la posibilidad de blanquear actividades ilícitas, cómo una norma legal podía eximir a una persona de declarar el origen de los fondos si esta información era esencial para determinar si estaba incurso en el delito de lavado de dinero. Por eso dijimos en esa oportunidad que estábamos recorriendo un camino inverso a la ley 25.246 que incorporó el lavado de activos de origen delictivo. Por eso, acompañamos hoy la sanción de esta ley porque estamos convencidos de que es un paso adelante.

Es importante hacer algunas consideraciones porque el GAFI no es un organismo de Naciones Unidas. Estamos diciendo que el lavado de dinero es un delito trasnacional y que recién en los 90 –1989/1990– el Grupo de los Siete crea el GAFI y ahora lo ha ampliado a cuarenta y ocho países, entre los cuales está la Argentina. Entonces, nos parece importante clarificar que aquí estamos hablando de la necesidad de un rol del Estado, de ese Estado que se trató de llevar a cero en las dos décadas y media de los tiempos del neoliberalismo, que significó un avance sustantivo en las actividades ilícitas realizadas en el mundo, porque esa palabrita mágica que fue la desregulación fue la que en gran parte significó el crecimiento de los países fiscales. Muy pocos hablan de estos paraísos, que se mencionaron aquí en este debate, y son un refugio financiero que cobraron auge en los años 70 y 80, momento en que en el mundo se consolidaba la hegemonía neoliberal. A nosotros nos llegó un poco después, en los 90. Entonces eso significó y significa que en estos paraísos fiscales hoy existen depósitos de entre 7 y 10 billones de dólares, lo que equivale al 25 por ciento del producto bruto interno mundial. Y se calcula que en dichos territorios hay un millón de sociedades amparadas en el anonimato. Sólo en las Islas Caimán, consideradas como la quinta plaza financiera mundial, hay más de quinientos setenta bancos, sólo veinte con presencia física en el territorio, con depósitos superiores a los 500 mil millones de dólares. Y en los cálculos se indican que a nivel mundial se lavan cada año 600 mil millones de dólares provenientes de negocios ilícitos.

Por eso, nos parece muy importante que se dé fin a ese doble discurso, muchas veces sostenido desde los países centrales, porque hoy estamos siendo observados y es importante sacar esta ley y, sobre todo, tener la decisión política de combatir los delitos vinculados con el lavado. Pero debemos tener en cuenta que de los ochenta y siete paraísos fiscales en todo el mundo, siete pertenecen al Reino Unido, dos a los Estados Unidos, dos a Holanda, uno a Italia y uno a Francia.

Entonces, es fundamental abordar esta cuestión como una cuestión trasnacional. Que siempre hagamos sentir nuestra respuesta como algo fundamental que hace al combate del lavado y del narcotráfico. Porque el lavado erosiona la institucionalidad democrática. Se mencionaron países de América latina, y esto lo vemos todos los días.

El lavado promueve la corrupción, que adquiere niveles muchísimo más preocupantes cuando se transforma en impunidad. Muchas veces, Fernando Savater dijo que hay corrupción en todos los países del mundo, pero cuando no se castiga, es decir, cuando no actúa la Justicia, esa corrupción se transforma, primero, en endémica, y después, en impunidad.

Nos parece fundamental avanzar, como decisión política, en el delito de lavado de dinero. Pero nos parece mucho más importante que la República Argentina adopte la decisión política de dotar de transparencia a sus instituciones. Porque nosotros hoy estamos actuando

de apuro al tener que sancionar esta ley junto con una ley correctiva. Pero este debate, que hace a la seguridad de cada uno de los ciudadanos en nuestro país, a la necesidad de consolidar las instituciones de la democracia, a dotarla de transparencia, tiene que ver, fundamentalmente, con que avancemos en una mejora de la calidad institucional que, todavía, es materia pendiente en nuestro país.

Por eso, señor presidente, además de adelantar este voto afirmativo, considero que no sólo es materia pendiente en la Argentina, sino que, en estos temas, tenemos que avanzar de la mano de la coordinación con el MERCOSUR y con la UNASUR. También hay que dar el debate en los organismos internacionales para que esto, que es el GAFI, que representa la dependencia de un grupo de países como el nuestro de otro grupo de países poderosos en el mundo, pueda integrarse como política global a las Naciones Unidas.

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Rodríguez Saá: la senadora Escudero le solicita una interrupción.

Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.

Sra. Escudero. – Antes del cierre de los presidentes de bloque, como presidenta de la Comisión, quisiera contestar algunas de las observaciones que se hicieron durante el debate.

Coincido con la senadora Bortolozzi, con la senadora Negre y con el senador Giustiniani, en que la Ley de blanqueo de capitales, en la Argentina, marcó un claro retroceso. Lo dijimos en el momento, en la sesión, y lo votamos en contra. Efectivamente, para tratar de recaudar 5 mil millones de pesos, dimos marcha atrás en la legislación y permitimos que se laven, en nuestro país, cifras importantes provenientes, obviamente, de ilícitos.

La segunda apreciación en la que coincido –la plantearon la senadora Bortolozzi, el senador Sanz y no recuerdo qué otro senador– tiene que ver con la dependencia de la UIF. Por el apuro con que estamos sancionando esta norma, no hacemos grandes cambios, solamente hacemos más transparente el procedimiento de designación y remoción. Pero creo que el tema no está cerrado. Lo tenemos que seguir conversando. Pero creo que darle mayor independencia y convertirlo en órgano extra poder, como decía el senador Sanz, no es una buena idea, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando.

Si bien la función principal es hacer inteligencia financiera, en definitiva, lo que se tiene que hacer es coleccionar la información y los elementos que sirvan de prueba en un proceso penal para terminar de castigar a los autores de estos delitos. Por eso me parece que es un debate abierto que seguiremos dando.

No coincido con lo que plantea el senador Sanz respecto a que no está bien no permitir denuncias anónimas. Creo que mientras la UIF sea parte del Poder Ejecutivo y tenga facultades tan graves, y frente a lo que puede resultar el escrache y la condena pública de una persona sólo porque se efectuó una denuncia anónima, me parece que, en estas circunstancias, la sanción es correcta y la prohibición de actuar por denuncias anónimas es absolutamente correcta.

Con relación al financiamiento que se propone concretar con el producido de las multas, constituye otro debate que tenemos que producir en la Argentina, porque casi todo el Poder Ejecutivo, hoy, está financiado por esos entes cooperadores de las distintas entidades que se autofinancian con las multas. Por ejemplo, el Registro Nacional de Armas, los registros de la propiedad del automotor, el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, etcétera. Así, hoy vemos cómo cualquier empleado de cualquier registro o entidad autónoma, a través de estos entes cooperadores, percibe otro sueldo más del Estado, producto de esta ficción de los entes cooperadores.

Coincido con la senadora Estenssoro en el sentido de que esta norma no debería ser

sancionada antes que la ley de acceso a la información pública. Si realmente tuviéramos la convicción y el compromiso como país de perseguir el delito y la corrupción, hace rato que deberíamos tener sancionada la ley de acceso a la información pública; y muchas de las cuestiones que hoy estamos planteando en este proyecto y en la ley correctiva no serían necesarias, porque ya serían de acceso libre para toda la ciudadanía, a través de su carga en Internet.

Con relación a la preocupación manifestada por el señor senador Fuentes respecto del lavado de dinero ganado en la Argentina y que se lava en el extranjero a raíz de la fuga de capitales, consideramos que es muy importante avanzar en la tipificación del autolavado, porque para que se pueda perseguir en el extranjero a personas que cometieron ese delito en el país, necesitamos que el mismo esté tipificado en la Argentina. ¿Cómo le vamos a pedir información a otra UIF de otro país acerca de actividades de un nacional que creemos que está fugando capitales, y probablemente producto de la evasión impositiva grave, si la Argentina no tiene penalizado hasta ahora dicho ilícito? Por eso, es importante tener una legislación homogénea o, por lo menos, tener penalizadas y tipificadas las conductas similares.

El senador Romero ha planteado alguna preocupación con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Quiero aclarar que la UIF había empezado a sacar resoluciones –me parece– sin un marco legal adecuado. Entonces, a raíz de las peticiones que se efectuaron en el marco de la comisión, empezó a corregir muchas de esas resoluciones que había dictado con anterioridad.

De acuerdo con el sistema constitucional argentino, nadie, en el sector privado, sea persona física o jurídica, puede ser obligada a hacer aquello que una ley formal dictada por este Congreso no lo obligue. Entonces, cualquier restricción al ámbito de libertad de las personas físicas o jurídicas, tiene que ser establecida por una ley formal.

En cuanto a la preocupación por la exclusión de los partidos políticos, de los sindicatos y de las obras sociales, esto va a estar resuelto en la ley correctiva por dos vías. En primer lugar, por la reforma que propone el senador Verna, según la cual todos los síndicos de entidades y todos aquellos que realicen auditorías de estados contables son personas obligadas a reportar, de modo que quien firme el balance de un partido político sea una persona obligada a reportar operaciones sospechosas. Pero, además, en el artículo 20, inciso 17, de la ley correctiva, se establece que son también personas obligadas de reportar aquellas que reciben donaciones y aportes de terceros. Me refiero a las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes. El artículo 17 de la ley correctiva menciona, en el dictamen, a las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros; tanto a los partidos políticos, como a los sindicatos y a las obras sociales, en la medida en que reciban donaciones o aportes de terceros.

El senador Morales planteará una corrección, que aceptaremos, que sería la siguiente: las personas físicas o jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros o del Estado. De esta forma, estaríamos ampliando el ámbito de las personas obligadas a reportar.

Finalmente, quiero hacer referencia a dos temas. Esto no sirve para nada si no hay una fuerte decisión de llevar adelante una política criminal de persecución del delito y de la corrupción y de lograr que no exista impunidad en la Argentina. Ratifico que queremos seguir siendo parte del G-20, que queremos seguir sentándonos en una mesa con los países desarrollados para poder seguir diciéndoles que hay reformas que se deben hacer a nivel global.

Para concluir, quiero leer algunos párrafos de un muy buen artículo de Jeffrey Sachs, profesor de Economía en la Universidad de Columbia, que se publicó hace poco en la

Nación, y que expresa: El mundo se está ahogando en el fraude corporativo. Los problemas son de mayor dimensión en los países ricos, que supuestamente gozan de buena gobernanza. Son los países ricos los que albergan a las empresas globales que cometen los mayores delitos. Dos años después de la crisis financiera impulsada por el comportamiento sin escrúpulos de los mayores bancos de Wall Street, ni un solo líder financiero ha enfrentado penas de cárcel. Cuando las empresas son multadas por malversación, sus accionistas, no sus directores, ejecutivos ni gerentes, pagan el precio. Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias mal habidas, lo que da la señal a Wall Street de que las prácticas corruptas tienen una sólida tasa de retorno.

Vamos a necesitar alumbrar –como decía el senador Giustiniani– los rincones oscuros de las finanzas, especialmente, los paraísos fiscales y los secretos bancarios suizos. La próxima vez –sigue diciendo Jeffrey Sachs– que escuche acerca de un escándalo de corrupción en África o en otra región pobre, pregunte dónde se inició y quién es el corruptor. Ni los Estados Unidos ni ningún otro país avanzado deberían apuntar con el dedo a los países pobres, ya que a menudo son las empresas mundiales más poderosas las que han creado el problema.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Pichetto. – Estás excluida de la lista del 4 de julio. (*Risas.*)

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: se ha hablado bastante en este recinto durante esta tarde del avance institucional que significa la sanción de esta ley y, luego de decir esto, se le hace una dura crítica.

Yo creo en las instituciones y, como creo en las instituciones, sostengo que hay que cumplir con la Constitución. La Constitución nos da el rol de cámara revisora, o sea, podemos corregir un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados. Entonces, ante una sanción de la Cámara de Diputados, el Senado, si considera que algo está mal, debe tratar de corregirlo. Se votará y podrá ganar o no la postura de las correcciones. Ese es el trámite institucional, republicano y constitucional.

El reconocimiento de no seguir ese camino, por voluntad del Parlamento, dictando inmediatamente después una ley correctiva que modifica la que se acaba de sancionar es un descrecimiento en las instituciones, es una falta de calidad institucional. No es un avance sino un retroceso. En la jornada de hoy, se tratará una ley de quiebras y se utilizará el mismo procedimiento. En lugar de corregirla se dictará una sanción correctiva.

Discrepo totalmente con el procedimiento. Creo que no es un avance sino un grave retroceso. Además, es un prejuizamiento sobre la conducta que tendrá la Cámara de Diputados, porque no se está confiando en que las instituciones van a funcionar. Nosotros modificamos, se remite a la Cámara de Diputados, que está reunida en este momento y, entonces –como sucede con muchísimas leyes–, corre el secretario a llevarle la sanción, están esperando para sancionarla. Aquí podría haberse acordado lo mismo para que no exista una sanción a la Argentina, que nadie quiere que exista.

La Cámara de Diputados está integrada por personalidades, porque a los bloques los presiden personalidades, y no creo que la doctora Carrió –que preside un bloque– ni que el ingeniero Solá –que preside otro bloque– ni el señor De Narváez –que integra un bloque– ni que el doctor Alfonsín –que es candidato a presidente y que integra un bloque– ni que el señor Solana –que es candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, que pueden sumar la voluntad política de la oposición, ni tampoco que el bloque oficialista vayan a negarse a tratar la ley para evitar su sanción; en todo caso, podrán insistir o aceptar las correcciones. Ese es el trámite correcto. No estoy de acuerdo en cómo se está haciendo hoy.

Sí estoy de acuerdo en que debe ser un órgano extra-poder, porque comparto el análisis que se ha hecho en cuanto a que una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser Estado y que las políticas de Estado van más allá de las pasiones, de los intereses y de las concepciones de un gobierno transitorio en una democracia. La Argentina tiene antecedentes feos. Todavía no se sabe cuál fue el origen de las valijas de Antonini Wilson ni a dónde ni para quién iban. Además, vaya a saber si estarán en la caja de seguridad del juzgado los 800 mil dólares.

Con relación al financiamiento de la campaña electoral del actual gobierno, debemos decir que, en los expedientes del triple crimen y de la efedrina, están cuestionados los principales aportantes, y que no hay avances en las investigaciones sobre los aportes a esa campaña electoral.

Y sobre el caso Schocklender, uno no sabe si debe felicitar al denostado Servicio Penitenciario Nacional, que tiene que cumplir con la consigna constitucional de que las cárceles no son para castigo sino para rehabilitación de los ciudadanos, porque logró que ciudadanos condenados como los hermanos Schocklender, que cumplieron la condena, saliesen preparados, capacitados, y no sólo que los preparó como abogados sino que salieron ricos. Porque, según lo que han declarado, parece que salieron ricos. Son inventores de inventos que nadie conoce. Entonces, uno no sabe si tiene que felicitar al Servicio Penitenciario o si tiene que investigar este tema por la gravedad de lo que estamos tratando.

Me parece que, por lo menos con el dictamen de la minoría, haríamos las correcciones con el trámite que establece la Constitución; por eso, personalmente, voy a votar afirmativamente dicho dictamen. Y, en cuanto a la ley correctiva, no la voy a votar, me opongo a su tratamiento y no me parece que sea el procedimiento correcto. La misma actitud asumiré con respecto a la ley de quiebras.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – En primer lugar quiero reivindicar el trabajo de la Comisión, particularmente el de su presidenta, la senadora Sonia Escudero, que en este tema de legislación relativa a la prevención del lavado y al financiamiento del terrorismo viene trabajando desde hace bastante tiempo. Y quiero felicitar no sólo a la presidenta y a los miembros de la Comisión sino también felicitarnos a nosotros, al Senado, por tener en este Congreso la actitud de buscar el camino de sancionar hoy la norma en consideración, más allá de que hay que hacer modificaciones y, a renglón seguido, tratar una norma correctiva, a fin de cumplir con compromisos internacionales que deben ser respetados por el país.

En este sentido, quiero reivindicar la actitud de los bloques de la oposición, porque en el clima áspero de algunas discusiones, se dice que la oposición hace todo lo posible para impedir ciertas situaciones propias del Estado argentino. Y no es así. Esta actitud ratifica lo que siempre se ha planteado, y no solamente en el caso de tratamiento de pliegos de ascensos de militares sino de proyectos de ley que, como en el presente, marcan una señal institucional clara. Reitero, en estos casos, la oposición siempre trata de contribuir de la mejor manera. Si bien hubo trabajos de legisladores del Frente para la Victoria, básicamente, la tarea para llegar a este punto ha sido llevada adelante por la oposición.

Por otra parte, quiero reafirmar algunos conceptos que ha expresado el miembro informante de nuestro bloque, el senador Ernesto Sanz. Me refiero a un tema que la presidenta de la comisión ha dejado en claro y que resume nuestra preocupación sobre este asunto. Concretamente, de lo que se trata es de preservar la verdadera independencia de la Unidad de Información Financiera según la redacción que figura en la norma.

La síntesis que ha hecho la señora presidenta tiene que ver con que es necesario asumir el compromiso de buscar la mejor manera de garantizar la independencia de criterio y

la menor injerencia del poder político en un organismo de semejante envergadura.

Como ha dicho el señor senador Sanz, la verdad es que la UIF pasa a ser otra AFIP, aunque con suprafacultades. De todas maneras, nosotros apostamos al mejoramiento de la calidad institucional en la medida en que se dé la mayor independencia de criterio posible a esta clase de organismos y no se los utilice para fines que no sean los que están previstos en la norma. Es decir, para ejercer alguna clase de presión o persecución, que ya se ha visto y a la que estamos acostumbrados, si bien no de todo el gobierno, al menos, sí de algunos funcionarios. Reafirmamos esa preocupación.

El Congreso de la Nación viene a dar respuestas a una situación sobre la que, como recién se ha planteado, no hay demasiadas sentencias firmes. En efecto, solamente hay una sola, pese a la gran cantidad de operaciones sospechosas que se reportan. Como ha quedado reflejado en la versión taquigráfica y por los informes que han dado referentes del propio gobierno nacional, se reportaron 587 operaciones en 2007, 1.000 en 2008, 1.631 en 2009 y 3.169 en 2010 y, como he dicho, se concretó una sola sentencia firme.

Esto nos debe hacer reflexionar sobre dónde se encuentra el problema. El problema, claramente, debe estar en todos los mecanismos establecidos para hacer cumplir la legislación. Si bien hay cambios para hacer en la norma, también es verdad que existe una responsabilidad de pura administración.

Señor presidente: no quiero abundar en las fundamentaciones que ha dado la señora presidenta de la comisión, que fue bastante clara respecto del texto de la norma a aprobarse y, luego, en lo que hace al proyecto correctivo. Solamente, quiero plantear algunas cuestiones que han merecido un debate por parte de diversos legisladores y, en particular, de nuestra bancada. Pero para eso debo volver a conceptualizar la reforma del Código Penal que estamos considerando.

A través de esta reforma, se propone la modificación de la tipificación del delito de lavado de activos, el cual posee su centro de interés en quien convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito, eliminando la previsión de que no hubiere participado del mismo.

La modificación que estamos planteando es muy importante, porque se está sacando al delito de lavado de activos del capítulo relacionado con el de encubrimiento. Se deja solamente el capítulo de encubrimiento y se establece un delito autónomo que es regulado en un nuevo capítulo y en un nuevo título.

Esto nos lleva a hacer un análisis que va más allá de lo planteado por el senador Giustiniani y otros senadores en cuanto al delito transnacional y del objeto fundamental de las Cuarenta Recomendaciones, que tienen que ver, obviamente, con la manera en que los países nos organizamos para prevenir y evitar el delito organizado, que es uno de los principales problemas en el mundo y, también, en nuestro país.

Creo que la institucionalización del delito de lavado de activos como un delito autónomo nos lleva no sólo a regular sobre cuestiones que son materia de prevención —y que están establecidas en las Cuarenta Recomendaciones— sino también, como expresó el senador Sanz, a darle una aplicación que tenga que ver con nuestra legislación.

Verdaderamente, las Cuarenta Recomendaciones están orientadas a regular la actividad y a prevenir el delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en cuanto a las instituciones financieras y respecto de ciertas actividades que, por su naturaleza, impliquen —a través del manejo de dinero del sector privado— la comisión de crímenes y el posterior delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, con relación a los procedimientos de debida diligencia planteados en la recomendación 5, se

expresa que las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas bajo nombres evidentemente ficticios.

La recomendación 6 hace alusión a las personas expuestas políticamente y a las entidades financieras. O sea, a los que pueden realizar actividades que, por su naturaleza, ameriten la regulación y la definición del delito de lavado y de financiamiento del terrorismo. Pero, fundamentalmente, se centra en las entidades financieras, en lo que se refiere a las relaciones de corresponsalía bancaria transnacional.

La recomendación 8 hace alusión a que las instituciones financieras deberán prestar especial atención ante determinadas cuestiones. A través de la recomendación 9, los países pueden permitir a las entidades financieras determinadas acciones, y se establece las excepciones. Mediante la recomendación 10, se dispone que las instituciones financieras deberán conservar la información. La recomendación 11 establece que las instituciones financieras deberán prestar especial atención a operaciones complejas e inusualmente grandes.

Con relación a las actividades reguladas, la recomendación 12 hace referencia a los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas, abogados y notarios, y también aborda el tema de los profesionales.

Respecto del debate que se planteó con relación a la inclusión de algunas personas jurídicas u organizaciones —en particular, en cuanto la preocupación planteada por el senador Romero acerca, por ejemplo, de la inclusión de los partidos políticos—, debo decir que, tal como lo expresó la senadora Escudero, las agrupaciones políticas quedan adentro. Es decir, no se regula la actividad política por la naturaleza de la actividad. Sí se establece que los contadores quedan como sujetos obligados a informar todos los lineamientos planteados por la legislación.

Y para tranquilidad del senador Romero, le digo que los contadores no nos salvamos de nada, ya que estamos en todos los incisos. Desde que firmamos como auditores externos los estados contables y estamos obligados a informar, aparecemos en todos los incisos, porque la legislación obliga a todas las personas jurídicas a rendir cuentas y a confeccionar estados contables. Pero la ley obliga sólo a los contadores —no a los abogados ni a los ingenieros— a firmarlos. No podemos ni siquiera salir, porque aparecemos en todos los incisos. Está bien que exista esta obligación cuando un profesional en Ciencias Económicas participe como auditor externo de los estados contables.

También nos parece bien esta modificación que se sugiere, que ya había sido planteada por el senador Sanz en el debate en comisión, de incluir a los síndicos. En este caso, también ya incluiría a otros profesionales, particularmente, a los abogados. Lo dicho, con la aclaración que las sindicaturas constituyen un órgano de control interno y el auditor externo reúne el requisito de tener independencia de criterio por realizar una tarea que es distinta a la del control interno.

Ahora bien, hablemos de las entidades financieras, los casinos, las organizaciones que exploten juegos de azar, que realicen compraventa de inmuebles, o todas las que tipificamos en el artículo 20. De hecho, este artículo sigue el espíritu de las Cuarenta Recomendaciones. No es para cualquier institución, es para las que realizan determinado tipo de actividad que, por su naturaleza, deban estar sometidas a ser sujetos obligados. Pero después, el inciso 17 —que recién ha planteado la senadora Escudero— incluye todas las organizaciones que reciban donaciones o aportes de terceros, con lo que el espectro es muchísimo más amplio. Y con la inclusión del contador para todos los estados contables, el espectro es mucho más amplio todavía.

Las distintas personas jurídicas tienen un control, por aplicación de esta ley, de doble o triple entrada. Primero, por el responsable que tienen que designar para que sea el nexo o para que informe por la naturaleza de la actividad. El propio contador, cuando la persona jurídica ya está sometida como sujeto obligado a informar, está obligado a hacerlo también. Si tiene síndico –porque debe tener sindicatura–, también la sindicatura. Es decir que la ley se aplica con un sistema de doble o triple entrada.

Este tema, aplicando las normativas de las Cuarenta Recomendaciones, no sólo va en la búsqueda de resolver y de tutelar los problemas del delito –un delito preexistente o precedente– de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, no solo sobre recursos obtenidos en la actividad privada. La inclusión de un párrafo en el inciso 17 de fondos públicos abre mucho más el espectro y va en línea con la decisión de declarar el delito de lavado de dinero como autónomo y establecerlo en un sólo capítulo. Ahí nos apartamos un poco del objeto que tienen las Cuarenta Recomendaciones, que intentan evitar el delito transnacional y el de lavado de dinero producidos por los negocios que se hacen con la droga, el narcotráfico y otras operaciones.

Nosotros vamos a plantear la inclusión de un párrafo en el inciso 17 que habla de que están obligados a informar todas las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros...

Sr. Pichetto. – ¿Se refiere a la correctiva?

Sr. Morales. – Sí, a la correctiva.

Sugiero la siguiente redacción, aunque, de todos modos, la presidenta de la comisión, luego, verificará si el texto está bien. Incluso, decimos que, asimismo, están obligados al deber de informar todas las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios, donaciones o aportes de fondos públicos. Porque hasta acá se habla mucho del caso Schoklender y no está incluido en la legislación; o del caso de la valija.

Con respecto al asunto de la valija con 800 mil dólares, que ha planteado recién el senador Rodríguez Saá, estaría bueno que el titular de la UIF proceda al decomiso. No sé qué ha pasado –el titular de la UIF está aquí presente–, pero que busque los 800 mil dólares, que haga el decomiso y cumpla...

Sra. Escudero. – El juez.

Sr. Morales. – El juez; que instruya al juez, lógicamente. Es decir que realice las acciones para que un juez determine esta acción. Pero trabajemos para el decomiso de esos fondos y que se apliquen a fines benéficos que el Estado pueda determinar. Ahora bien, con respecto a la situación de algunas personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos, eso no está previsto en la legislación. Pensé que podían entrar por las personas políticamente responsables o políticamente expuestas.

Para tranquilidad de los que quieren más controles en los partidos políticos, cabe destacar que, en la Resolución N° 11 que ha dictado la UIF, en el inciso c), figuran las autoridades y apoderados de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por consiguiente, si hacemos esta modificación en el inciso 17, los partidos políticos entran por aportes de terceros o por aportes de fondos públicos como persona jurídica. Pero, a su vez, las autoridades de los partidos políticos y los apoderados están, también, obligados a informar por esta resolución emitida por la UIF. Además, en el inciso d) de esta Resolución 11, figuran los representantes legales de las organizaciones sindicales y empresariales como personas políticamente expuestas. Entonces, hay una reglamentación.

Pero las que no figuran son aquellas personas, físicas o jurídicas, ya no que reciban aportes de terceros sino fondos públicos. Por eso, queremos incorporar este agregado, de

modo tal de que todos los Schocklender y todas estas organizaciones, también, estén obligadas a rendir cuentas no sólo para el caso del delito de lavado, que es autónomo. Se debe tutelar y regular la situación de recursos o dineros provenientes del narcotráfico, así como los de todas aquellas operaciones que puedan surgir de la malversación de fondos públicos en donde haya un delito preexistente.

Me parece que este cambio en el artículo 17 nos genera un espectro mucho más amplio en cuanto a la tipificación del delito y prevemos todas las situaciones. Por eso es que queremos plantear esta modificación. Luego de este cambio que habíamos sugerido y que está en el texto, hay otra cuestión conceptual que deseamos plantear.

En cuanto a la Resolución N° 30 que dictó la UIF para las personas jurídicas sin fines de lucro —que, lógicamente, están reguladas en una recomendación especial, que es la número 8—, se trata de organismos sobre los que el Estado debe velar porque son instituciones usualmente utilizadas como nexo, conducto o canal para el lavado de dinero.

La recomendación número 8, referida a organizaciones sin fines de lucro, establece que los países deben realizar la adecuación de las leyes y reglamentos referidos a entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que no sean utilizadas ilegalmente.

Continúa exponiendo una grilla de organizaciones criminales u otro tipo de organizaciones que están dedicadas a este delito del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De hecho, se establece toda una normativa de recomendaciones a incluir con el fin de atender el tema relativo a cómo funcionan las organizaciones sin fines de lucro que reciben aportes de terceros.

Está bien el dictado de la Resolución N° 30, sancionada por la UIF, cuyo titular, el señor Sbatella, se encuentra acá presente. La cuestión es que nosotros no planteemos —por eso hemos agregado los incisos d) y f)— que tampoco el Estado tiene que delegar la obligación a las entidades ni a las personas jurídicas de establecer políticas. La política de prevención de las actividades de lavado y de financiamiento del terrorismo las tiene que dictar el Estado, el cual también tiene que plantear los lineamientos. Entonces, a algunas organizaciones sin fines de lucro que, eventualmente, no tienen la capacidad del caso, a través de esta Resolución 30, las están obligando a dictar un manual de procedimientos; capacitar al personal; después, establecer las normativas para los registros de análisis, gestión de riesgo, etcétera. Como decía recién el senador Cimadevilla, más o menos tienen que sustituir al Estado en la implementación de políticas.

Por eso es que el inciso e) que estamos proponiendo para el artículo 4° de la ley correctiva plantea a la UIF que dicte los lineamientos generales, que dicte las normativas: cuál es el manual de procedimientos modelo para determinada actividad. Por ejemplo, podemos mencionar las actividades correspondientes a las compañías aseguradoras, a los casinos, a las entidades de juegos de azar, etcétera.

Esto también tiene que ver con el principio de la centralización normativa, con la centralización de disposiciones. Luego, cada entidad tendrá que adecuar sus particularidades en función de la naturaleza de cada una de las organizaciones. Por eso el inciso e).

El inciso f) establece que sea el Estado el que ponga en marcha los mecanismos y programas de capacitación. Esta tiene que ser ya una cuestión de política pública, no delegada al arbitrio de las organizaciones, de las personas jurídicas que terminan siendo sujetos obligados para el cumplimiento de esta ley.

Así que este es un tema conceptual que, en algún momento, luego de que se apruebe el proyecto de ley y podamos tener la sanción de Diputados, nos gustaría discutirlo con las

autoridades de la Unidad de Información Financiera para lo que regulemos de la mejor manera –establezcamos criterios, líneas, pautas generales directrices–, a efectos de que tampoco haya traslado de las responsabilidades que son del propio Estado.

El tema de la independencia de la Unidad de Información Financiera –que ha sido planteado por el miembro informante– es una cuestión que creemos todavía constituye materia pendiente para seguir debatiendo. Reitero lo que dije al principio, presidente: quiero reivindicar la actitud del Congreso de la Nación y que el oficialismo nos permita también reivindicar la actitud de la oposición que, especialmente en el trámite de la comisión, ha llevado el peso del trabajo, de la tarea, con los legisladores del Frente para la Victoria; pero estamos dando respuesta al aprobar la ley. Esperamos que la Cámara de Diputados pueda sancionar la ley correctiva.

Con estos argumentos, desde nuestro bloque, vamos a votar el proyecto como ha venido de Diputados y, luego, vamos a votar la correctiva. Estamos de acuerdo, también, con la inclusión de los síndicos. Si la presidenta está de acuerdo con este párrafo para el inciso 17) de la modificación del 20, nosotros votaríamos en general y en particular.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer lugar, quiero reivindicar en este tema el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional –de la presidenta–, que impulsó esta ley con mucha energía. Pidió al Congreso de la Nación que hiciéramos un esfuerzo para poder cumplimentar, en términos y en plazos, antes de la reunión del día 20 en el GAFI; y siguió este tema con mucha atención y con mucha dedicación.

En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento especial a la tarea de la comisión que preside la senadora Escudero. Creo que, además, el conocimiento internacional que ella tiene como representante del Congreso en el Parlatino y su presencia permanente en organismos internacionales le han dado una visión muy clara de lo que significa que la Argentina pueda tener una ley contra el lavado de dinero que cumplimente los estándares internacionales; además, que no tengamos sanción. Porque el tema de la sanción tiene que ver, también, con el costo financiero que pagan las empresas argentinas; tiene que ver con los perjuicios que se ocasionan en términos del funcionamiento económico del país. O sea, no es simplemente una sanción que se echa a rodar al viento sino que tiene repercusiones en la actividad económica privada del país.

Así que la tarea llevada por la presidenta, por la propia comisión y por todos los sectores políticos está indicando un nivel de responsabilidad que hemos tenido en otros temas cuando discutimos y definimos políticas de Estado. Y en el Senado, esto no es nuevo; constituye una actitud que tenemos frente a estos compromisos u obligaciones institucionales respecto de que el país tenga una legislación adecuada.

En este sentido, quiero reivindicar al Congreso Nacional porque desde la década del 90 con la ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, empezó a trabajar en esta materia. En el artículo 25 de esa ley, ya se abordaba la temática del lavado de dinero proveniente del delito de narcotráfico. Allí, también se planteaba un conjunto de instituciones, algunas extrañas al sistema penal argentino; incluso, costaron una adaptación y una comprensión, como las figuras del arrepentido y de la entrega vigilada. Estamos frente a situaciones nuevas del delito transnacional que requieren respuesta por parte del Estado con normativas que puedan responder y tratar de prevenir este tipo de delitos tan complejos.

Luego, con la legislación y la creación del organismo, con la ley que regula el sistema de la UIF, dimos otro paso. Este proyecto de ley es un avance importante; desde el propio mecanismo de selección, que plantea casi un esquema parecido a la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la evaluación de los antecedentes y con un

funcionamiento dentro de la lógica del gobierno.

No lo digo para ofender a nadie pero, a veces, nos penetra mucho el pensamiento ONG o el creer que los organismos pueden girar locos en el funcionamiento del Estado sin depender de la estructura política institucional. En el fondo, hay casi un pensamiento contrario a lo que es la esencia y la naturaleza del poder y la política. Esto lo discutimos en el cruce que tuvimos con el senador Sanz y él está convencido. Además, los países centrales tienen a este organismo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, en muchos casos, dependientes del Ministerio de Hacienda y, en otros, del Ministerio de Finanzas.

En general, son organismos autónomos pero funcionan dentro de la estructura del Poder Ejecutivo y dependen del Ministerio de Economía: Australia, Canadá, México y Brasil. No hay otra lógica. En el mundo, no hay ningún caso de funcionamiento de este tipo de organismos que dependan del Poder Legislativo o que funcionen como si fueran un satélite que girara y que tuviera un superpoder.

Esto me hace acordar al debate del Banco Central. En la Argentina, con el pensamiento que tenían muchos economistas, el presidente del Banco Central parecía que no dependía del Poder Ejecutivo Nacional y que podía hacer lo que quería. Son pensamientos absurdos, que no se ajustan a la verdad, que no tienen un correlato con la realidad institucional y que, además, no están diseñados para un partido en el poder. Mañana vendrá otro gobierno democrático surgido de la voluntad popular, que tendrá que utilizar estas instituciones y funcionar desde la órbita del Poder Ejecutivo. La UIF no puede funcionar desde el Parlamento. No tiene lógica; tampoco, que funcione como un órgano totalmente independiente; debe tener un reporte al Poder Ejecutivo Nacional.

Viene bien discutir esto porque hoy estamos debatiendo sobre el tema de la UIF y mañana vamos a discutir otra cosa. Nosotros tenemos que fortalecer una visión que esté ligada al funcionamiento político institucional y a la existencia de partidos en la Argentina. Por eso, cuando escucho que también los partidos políticos tienen que estar enfocados en el tema del lavado de dinero, me parece que expresa un pensamiento de la antipolítica. Nadie está diciendo que los partidos políticos pueden blanquear dinero proveniente del narcotráfico, como ocurría en los 80 y 90 en Colombia, pero los sistemas de partidos, el control de los ingresos de recursos en término de las elecciones está supervisado hoy por la justicia federal, sin necesidad alguna de una ley. La Justicia tiene que acreditar los fondos, ver cómo se obtienen y ratificar después la rendición de cuentas que hagan los partidos. Todo esto lo ha votado el Congreso. Entonces, tampoco adoptemos una postura de sobreactuación ni sobredimensionemos estos temas. Creo que esta figura está fundamentalmente dirigida y enfocada –y esto no lo digo yo sino que lo han dicho especialistas en el ámbito de la comisión– contra el delito organizado, que es el que hace el lavado. Después, hay otras figuras y otros delitos que también están comprendidos.

La preocupación que tenía el senador Morales está comprendida. Si uno analiza en detalle el artículo 6° de la ley podrá ver que dice que la Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la trasmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, artículo 303 del Código Penal, preferentemente... – este es un concepto importante que además tiene que ver con la interpretación que van a hacer en el GAFI de esta figura –, ...proveniente de la comisión, y ahí se hace un detalle de todos los delitos de perfil organizacional, delitos importantes como el contrabando, armas, actividades de asociación ilícita en términos del artículo 210, etcétera.

¿Qué pasa con este término “preferente”? El concepto de “preferente” se refiere a que esta enunciación del artículo 6° no es taxativa sino que comprende a todos los ilícitos que puede encubrir una actividad de lavado de dinero.

En el caso de una asociación civil que recibe fondos públicos se van a configurar varios delitos en concurso real: por ejemplo, la posibilidad de que pueda haber una defraudación calificada al Estado, porque son fondos provenientes del Estado nacional – artículo 174, inciso 5°)–, en concurso real con el delito de lavado de dinero, porque ahora la figura es una figura autónoma y ya no es necesario puntualizar el delito precedente, que era uno de los temas que nos limitaba en la investigación de la actividad del lavado. Antes había que probar que había delito de narcotráfico, trata de personas o robo de automotores en un esquema organizacional. En definitiva, antes había que acreditar el delito principal. Pero a partir de ahora, con la figura autónoma ya no hace falta e, incluso, el Código va a funcionar con las distintas figuras que ya están previstas.

En varias oportunidades aquí se mencionó el caso Schoklender, que tiene que ser materia de investigación judicial y donde la propia organización remitió todos los antecedentes. Allí la UIF realizó una tarea realmente importante de información en el caso Schoklender, a través de más de cuatro mil fojas que fueron elevadas al fiscal. No estuvo inactiva, sino que estuvo haciendo una tarea de investigación administrativa importante a los fines de acreditar los supuestos que formularon la denuncia de esos legisladores. Y ayer se elevaron las actuaciones al fiscal de turno en un volumen de gran importancia para la investigación que se tendrá que llevar adelante en sede judicial.

El concepto “preferente” quiere decir que no excluye otros delitos. De todas maneras, nosotros no vamos a oponernos al planteo que hizo el senador Morales para consignarlo en la norma correctiva. Además, yo tengo confianza en que la Cámara de Diputados lo va a tratar, que va a ayudar a mejorar la norma y a enfocarla hacia donde debe estar. Incluso, fíjense que la evasión impositiva no es una figura como la de cualquier evasión. Acá hemos hecho esto también en defensa del ciudadano porque, si no, cualquier figura puede ser lavado de dinero, y esto no es así.

Permítanme también estar en un plano controvertido con el concepto de “denuncia anónima”. Yo no estoy de acuerdo con la denuncia anónima. ¿Por qué? Porque la denuncia anónima es peligrosa en este tipo de figuras. El que haga la denuncia que se responsabilice, que ponga la firma.

Hay algunas precauciones o reflexiones que se hacen acerca de cómo tiene que funcionar la UIF, a fin de señalar que no tiene que servir para que el organismo actúe en el esquema político, para que no persiga, etcétera. Coincido totalmente con eso. Pero también la denuncia anónima, muchas veces, abre camino a investigaciones que tienen repercusión mediática y que lesionan seriamente a esa persona, a un funcionario público o a cualquier ciudadano común, y ustedes saben que después las aclaraciones, en los medios de comunicación, salen chiquitas y en la página de los crucigramas. Esto es así, ésta es la historia. Creo que en este sentido tenemos que actuar con responsabilidad.

También quiero responder a esta cuestión de que el blanqueo que votamos en el Congreso sirvió para que vinieran aquí todos los dineros del narcotráfico y de operaciones ilícitas. En verdad, yo creo que sirvió como instrumento para que mucha gente que tenía plata en la caja de seguridad la pusiera en circulación. Además, esto también lo hicieron países centrales. Ya lo discutimos en su momento: en Italia, Bélgica y en varios países se hicieron operatorias de lavado, así como también de moratoria impositiva; blanqueo y moratoria impositiva que sirven... –no fue un *lapsus* (risas)– ...fundamentalmente, para que las empresas puedan acomodar sus cuentas.

Veníamos de la crisis de 2001. Ustedes recordarán que había muchas empresas que tenían deuda impositiva. Se habían refinanciado los pasivos de la Argentina y no habíamos ordenado el tema de la moratoria impositiva con muchas empresas dentro del país. Había

demanda de los sectores Pymes. El instrumento del blanqueo también sirvió para que mucha gente que había actuado en defensa propia, tratando de proteger sus ahorros, pudiera volver a colocarlos en el sistema productivo.

Acá se han traído cifras muy interesantes. El Banco Interamericano dice que este país es el de mayor lavado del mundo. Y yo no voy a hacer la defensa del sistema financiero argentino, que en la crisis de 2001 tuvo un comportamiento pésimo, que además prestaba a los estados provinciales simplemente con garantía de coparticipación y que contribuyó, indudablemente, a la crisis que vivió el gobierno de ese momento y al proceso económico que vivimos durante 2001 y 2002. Me refiero al “corralito” y a las medidas que se tomaron que, indudablemente, estuvieron en cabeza de un gobierno, pero que fueron la consecuencia de un conjunto de acciones muy complejas. Sin embargo, me parece que nuestro sistema financiero es bastante transparente. Creo que la operación en blanco, tanto en entidades financieras como en bancos, es bastante precisa y se maneja con un nivel de información muy controlada.

La Argentina no tiene un paraíso financiero, como lo tienen algunos países que muchos periodistas ponen como ejemplo. Me gusta mucho escuchar a los periodistas argentinos –a algunos– cuando ponen, como ejemplos, a países lindantes. Los ponen como modelos ejemplares, aunque tienen estructuras financieras que no informan y no tienen ningún tipo de norma de esta naturaleza. De cualquier manera, no voy a abrir ahora un conflicto internacional con nadie. Lo que digo es que nuestro sistema financiero funciona bien. Que hay economía en negro, que es de difícil control y que lógicamente hay que trabajar para que eso se blanquee, por supuesto que es así. Seguramente, cuando el Banco Interamericano hace esas evaluaciones, las hace en base a estadísticas de lo que significa la operatoria en negro.

Indudablemente, la Argentina tiene en este tema un comportamiento bastante normal. Fíjense cómo funciona una potencia central como los Estados Unidos: en el estado de Fort Lauderdale, a 50 kilómetros de Washington, se han constituido más sociedades anónimas que habitantes. Y estas sociedades anónimas funcionan para todo tipo de actividades sin pagar impuestos. Lo mismo ocurre con el escenario de Bahamas. Entonces, yo digo que todos tienen que ajustar acá y trabajar con seriedad.

Recién, la senadora Escudero cerró su exposición con una serie de reflexiones que nos leyó, y a mí me parece que también estamos compartiendo una mirada acerca de ejemplos que tienen los países centrales frente a este tema.

Luego de la crisis de las hipotecas que explotó en los Estados Unidos, al único que condenó el sistema financiero americano fue al señor Madoff, que hacía un viejo fraude consistente en quedarse con los ahorros de los nuevos para devolvérselos a los viejos. Pero, en realidad, fue el único que pagó.

Entonces, tampoco nos hagamos un haraquiri en la Argentina diciendo que somos un país de lavado y que aquí todo es un esquema de corrupción, porque creo que dentro de la lógica este país funciona con sus instituciones y tiene mecanismos de control bastante eficaces. ¿Hay que mejorarlos? Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Hay que luchar contra el delito organizado? Sí, estamos de acuerdo también con eso.

Yo tengo una visión sobre este tema: creo que en algún momento la Argentina tiene que abordar la situación de los delitos complejos desde la estructuración de un sistema judicial de fiscalías y de jueces especiales en la lucha contra el delito organizado, creando además también una estructura especial en la lucha contra el delito organizacional y los delitos corporativos mafiosos. Para esto va a ser necesario hacer muchas adecuaciones y seguir también el rumbo que han tomado algunos países como Italia y Estados Unidos, en los

cuales estos delitos se enfrentan con tecnología, con informática, con nivel científico y con gran capacidad de inteligencia criminal, dado que no basta simplemente con la tarea de la Policía Federal –la que tiene departamentos internacionales bastante buenos– porque me parece que hace falta mayor logística y recursos más importantes puestos al servicio de esta lucha y de este flagelo que, indudablemente, empieza a gravitar en la Argentina. Antes, nuestro país era de tránsito –como se decía en las décadas del 80 y del 90– y hoy ya es un país de consumo. Hoy hay consumo en el conurbano, en los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires y también en los ricos. Pero, indudablemente, los sectores más pobres son los más perjudicados frente a esta situación.

A la vez, se empiezan a corromper las fuerzas de seguridad porque el delito del narcotráfico trae aparejado mucha plata y, entonces, muchos empiezan a mirar para otro lado.

Hay un libro muy interesante que se publicó en la década del 80 en Colombia bajo el título “El día que se pudrió Colombia”, que se refiere al momento en que los carteles empezaron a poner plata en el sistema político colombiano y también en las fuerzas de seguridad, contaminando y corrompiendo a esas instituciones. De hecho, Escobar Gaviria, quien fue jefe del Cartel de Medellín, llegó a ser diputado suplente en el Congreso colombiano, lo que da la pauta de la dimensión y del poder económico que tuvieron los carteles. Más aún, según me apunta el senador Fuentes, Colombia debía cerca de 2.000 millones de dólares y él ofreció pagarla. De tal modo que la infiltración, sobre todo en lo que fueron las estructuras de seguridad, fue muy notoria. Estos ejemplos nos tienen que servir para ir abriendo un camino y lograr una legislación más avanzada y moderna, con instituciones más preparadas para luchar contra este tipo de delitos.

Para terminar, creo que hemos hecho lo correcto. Si hubiéramos decidido remitir este asunto con modificaciones, creo que hubiéramos estado en riesgo. Considero que se ha hecho un gran esfuerzo por sancionar esta iniciativa para que el día 20, en la reunión que tenemos a nivel internacional, la Argentina pueda mostrar este avance. Así que me parece que este es un hecho positivo. Por eso, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento a todos los senadores de los distintos partidos que han posibilitado el tratamiento de este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pampuro). – Antes de someter a votación el proyecto, por Secretaría se dará lectura de algunas situaciones correctivas.

Sr. Secretario (Estrada). – Se ha recibido una fe de erratas de la Cámara de Diputados que ya está en conocimiento de la comisión. Es el expediente CD 44/11, que dice lo siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin de poner en su conocimiento que, en la comunicación al Honorable Senado del expediente 15- PE-10 y 1335 - Orden del Día 2011 -, sobre modificación del Código Penal en materia de lavado de activos, se deslizó un error material. En el artículo 11, donde dice “Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25246 y sus modificatorias por el siguiente texto...”, debe decir lo siguiente: “Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25246 y sus modificatorias por el siguiente texto...”, manteniéndose igual la redacción hasta el final del artículo.

Sr. Pichetto. – Era errónea la remisión al artículo 10.

Sr. Presidente (Pampuro). – Así es.

Entonces, si hay asentimiento, se va a votar...

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: primero deberíamos votar la sanción de la Cámara de Diputados y, luego, leeré las correcciones y modificaciones a la ley correctiva.

Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en una sola votación en general y en particular.

Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, se hará una sola votación en general y en particular.

Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente: como anuncié, voy a votar en general a favor del proyecto de ley y en particular voy a votar negativamente los artículos 8°, 15, 16, 17 y 19.

Sr. Secretario (Estrada). – Queda constancia en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Mestre.

Sr. Mestre. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar si se autorizan las inserciones.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.¹

Ahora sí pasamos a la votación en general y en particular...

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: como yo tenía un dictamen en minoría, dije que apoyaba el proyecto de ley en general pero no así en particular. Entonces, quiero dejar constancia de mi voto negativo en particular porque he presentado un dictamen en minoría.

Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Rodríguez Saá también se manifestó en el mismo sentido.

Sr. Rodríguez Saá. – Si se va a votar de esta manera, yo voy a votar en contra.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.

Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: yo había hablado de mi abstención. Por lo tanto, como señalé antes, voy a votar afirmativamente en general el proyecto de ley en revisión y me voy a abstener en la votación en particular de esa iniciativa. Por otro lado, dejo sentado que voy a votar afirmativamente el proyecto de ley correctivo.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar la autorización para abstenerse de votar de la señora senadora Bortolozzi de Bogado.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60 votos por la afirmativa y 2 por la negativa, con las aclaraciones hechas por los senadores en cada caso.

Le pido al señor senador Calcagno y Maillmann que vote a viva voz.

Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran entonces 61 votos por la afirmativa y 2 por la negativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quisiera interponer una reconsideración de la votación; de lo contrario quedará como que votamos todos por la afirmativa, más allá de las consideraciones que hicimos, porque después nadie las ve ni queda constancia de ellas.

Todos apoyamos el proyecto en general. Entonces, planteo una moción de reconsideración para que se vote por separado en particular. En ese caso yo voy a votar por la negativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, se va a votar en particular. En general ya se ha votado.

¿Usted se va a abstener de votar, senadora Bortolozzi de Bogado?

Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, habría que aprobar la abstención de la senadora Bortolozzi de Bogado.

Varios senadores. – Ya fue aprobada.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa, 4 negativos y una abstención.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...*¹

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.¹

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – El dictamen de comisión de la ley correctiva va a tener dos modificaciones en su artículo 2°. En consecuencia, propongo que el artículo 2°, inciso 17, quede redactado de la siguiente manera: “Las personas físicas o jurídicas que reciban donaciones o aportes públicos o privados”. Y en el mismo artículo se agregaría un inciso 23 con el siguiente texto: “los profesionales cuando actúen como síndicos societarios o como auditores externos de estados contables”.

Con estas modificaciones, solicito que se vote en general y en particular.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se votará en general y en particular.

– *Asentimiento.*

Sr. Presidente (Pampuro). – Habiendo asentimiento, si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa y uno por la negativa.

– *El resultado de la votación surge del Acta N° ...*¹

Sr. Presidente. – Senador Calcagno y Maillmann: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran entonces 58 votos por la afirmativa y uno por la negativa.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.¹

Pasamos al segundo tema.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Quiero decir que omití hacer una aclaración: al haberse incorporado el inciso 23) hay que eliminar el último párrafo del inciso 12), que dice lo siguiente: “en el caso de los profesionales de Ciencias Económicas la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables”, porque ya hemos votado eso en el nuevo inciso 23).

Que se tenga en cuenta esto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.

Sr. Pichetto. – Solicito que se corrija, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.

¹ Ver el Apéndice